

HILDEBRANDT

en sus trece

FOTO JOEL DURÁN • H13



Sánchez insiste: **"Este gobierno** **no será legítimo"**

(5, 6 y 7)

Nuevo Plan Verde

El 2º fujimorismo también se aliará con los militares

(2, 3 y 4)

El nuevo Plan Verde

► El segundo fujimorismo se parece tanto al primero que ha construido una alianza férrea con militares y policías. No se trata sólo de limpiarles pasados y prontuarios sino de darles impunidad para los años que vienen. Estamos avisados

AMÉRICO ZAMBRANO

Cuando Keiko Fujimori llegue a Palacio, encontrará algo más que una amplia representación parlamentaria. Durante los últimos meses el fujimorismo impulsó un conjunto de leyes que amplían la protección legal de militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos, estrechó sus vínculos con las Fuerzas Armadas e incorporó a sus filas al ex jefe del Comando Conjunto César Astudillo Salcedo, hoy senador electo y una de las figuras que diversas fuentes ubican como posible ministro de Defensa en el próximo gobierno.

La reconstrucción de los vínculos con las FF.AA. también se trabajó en los cuarteles. En los últimos seis meses el presidente del Parlamento y senador electo por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, recorrió cuarteles del Ejército, bases militares y otras dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Participó en ceremonias castrenses, recibió reconocimientos y fortaleció relaciones con altos mandos militares y policiales, entre ellos la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú (Adogen).

La secuencia adquiere

una dimensión distinta ahora. La hija de Alberto Fujimori asumirá el poder en medio de un clima de polarización y con protestas anunciadas por sectores de la izquierda.

En ese escenario, el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía puede resultar decisivo. Si las movilizaciones derivan en enfrentamientos con las fuerzas del orden, militares y policías intervendrán bajo un marco legal que hoy les ofrece una protección mucho mayor frente a eventuales investigaciones penales.

"El fujimorismo, con Rospigliosi a la cabeza, ha logrado reconstruir su relación con las Fuerzas Armadas", sostiene Carlos Rivera, coordinador y abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). "Lo que estamos viendo no son hechos aislados sino parte de una misma estrategia", dice.

Entre enero y junio de este año Rospigliosi convirtió a los institutos armados y policiales en uno de los principales destinos de su agenda pública.

Visitó el Hospital Militar de Piura y el Hospital Militar Central; recorrió el Fuerte Rafael Hoyos Rubio, en el Rímac; supervisó la Base de Infantería de la Marina en Ancón, la Dirección de Aviación Policial, la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes),

Visitas a cuarteles, acercamiento a los altos mandos, leyes de impunidad y presión sobre los jueces que se negaron a aplicarlas. Fernando Rospigliosi fue el principal operador de esa estrategia.





César Astudillo Salcedo, exjefe del Comando Conjunto y hoy senador electo por Fuerza Popular, es voceado como posible ministro de Defensa del gobierno de Keiko Fujimori.



Militares y policías llegarán al gobierno de Keiko Fujimori con un marco legal que, ante eventuales protestas, les da una carta mucho más amplia para usar la fuerza y enfrentar menos riesgos penales.

la Base Naval del Callao y la Escuela de Aviación Civil de la Fuerza Aérea. Asistió también a la conmemoración del conflicto del Cenepa, al aniversario de la Operación Chavín de Huántar y al inicio del año académico de la Escuela de Oficiales de la Policía. En varias de esas actividades recibió reconocimientos públicos por sus promesas de respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía.

Pero hubo dos visitas que sintetizan mejor que ninguna otra el sentido de esa relación. El 23 de febrero pasado Rospigliosi ingresó al penal Virgen de las Mercedes, en Chorrillos, donde se encuentran reclusos militares condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Lo acompañó el general del Ejército en retiro Juan Rivero Lazo, exjefe de Inteligencia del Ejército e integrante del grupo Colina. Rivera fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de la masacre de Barrios Altos. En diciembre de 2024 fue excarcelado por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundada una demanda de hábeas corpus sobre la modificación del cómputo de su sentencia.

Cuatro meses después Rospigliosi volvió a reunirse con quienes defendían la misma causa. El 17 de junio participó en una reunión de la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú. "Conversamos sobre las leyes aprobadas a favor de las Fuerzas Armadas y la Policía y sobre la situación de muchos militares encarcelados y procesados injustamente por el sistema judicial politizado, y las medidas a adoptar en su defensa", escribió luego en su perfil de X.

Rospigliosi no llegó a esta agenda por casualidad. En el año 2000 publicó el libro "Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante década las instituciones militares", un análisis político sobre el modo en que Vladimiro Montesinos convirtió a los institutos armados en uno de los principales soportes del régimen de Alberto Fujimori.

Veintiséis años después, ese conocimiento resulta clave para entender la arquitectura legal que el fujimorismo impulsó desde el Congreso, con Rospigliosi a la cabeza.

“Un aspecto fundamental para la sostenibilidad de un gobierno autoritario es fortalecer su relación con los militares. Lo sabe Rospigliosi porque él mismo ha estudiado la relación entre el fujimorismo y las Fuerzas Armadas”, afirma Carlos Rivera. “La lógica que une la amnistía, la prescripción, la justicia militar y el resto de iniciativas aprobadas por el Congreso es una sola: construir un nuevo marco legal para liberar a los militares de la justicia ordinaria”, explica.

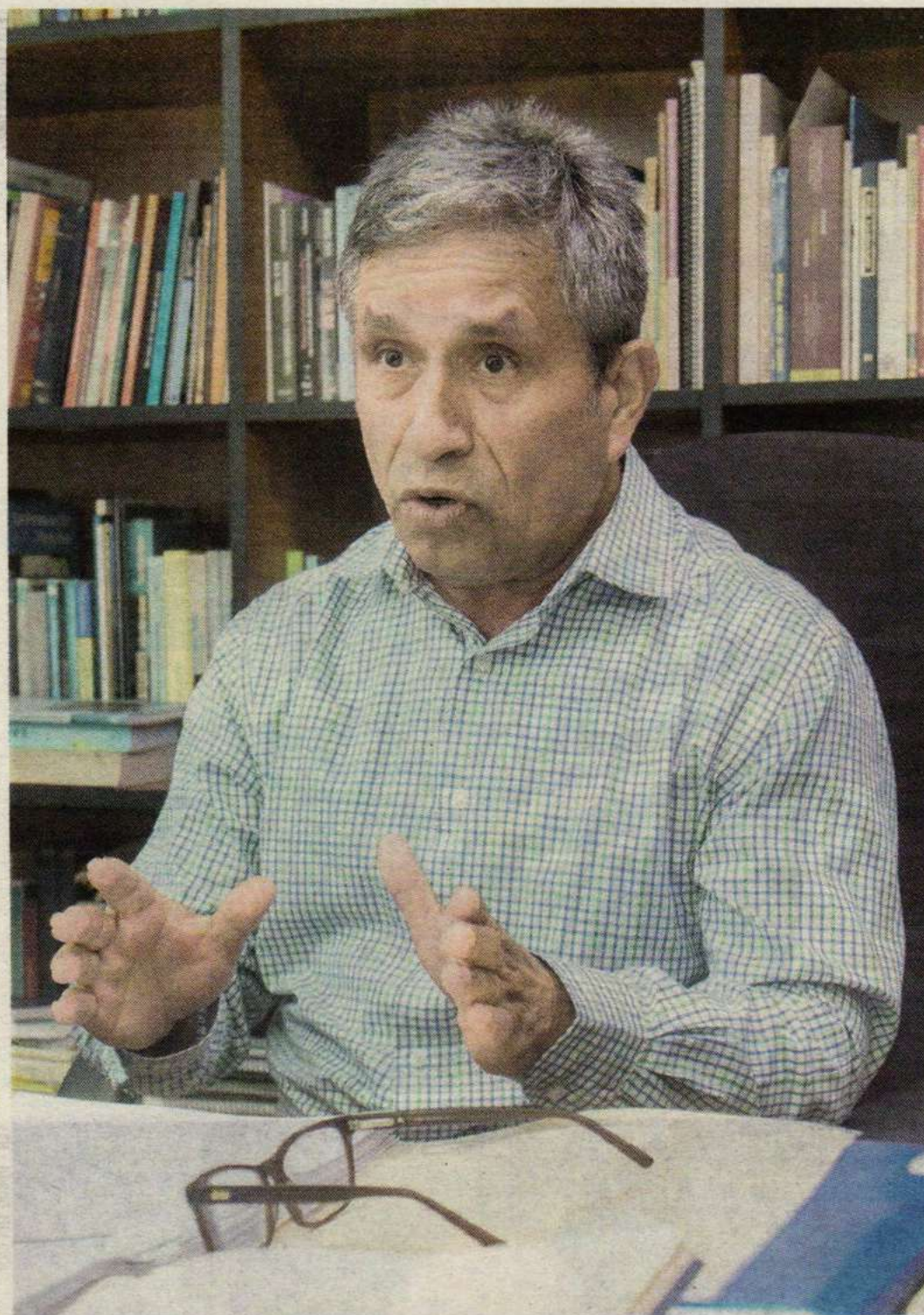
La primera pieza de ese engranaje fue la ley de amnistía, promulgada en agosto de 2001 tras ser impulsada por la Comisión de Constitución presidida por Rospigliosi. La norma concedió amnistía a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa procesados por hechos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000. También eximió de responsabilidad penal a los condenados procesados mayores de 70 años vinculados a esos casos y ordenó el archivar de los procesos que aún no contaban con sentencia firme.

Otra jugada clave fue la aprobación de la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad. Estableció que nadie puede ser procesado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú, en el año 2002.

La consecuencia práctica fue abrir la puerta a la prescripción de cientos de procesos contra exmilitares, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado abstenerse de aplicar esa norma en casos como Barrios Altos y La Cantuta.

Pero aquella maquinaria encontró un obstáculo inesperado. Contra lo que esperaban sus impulsores, buena parte de los jueces

“El fujimorismo ha buscado construir una relación de protección con las Fuerzas Armadas. Hacer de los militares una clientela cautiva para fortalecer una base de apoyo a favor de Keiko Fujimori”, advierte Carlos Rivera, del IDL.



encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos decidió inaplicar las nuevas normas por considerarlas incompatibles con la Constitución, el Estatuto de Roma y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La promesa de cerrar definitivamente esos procesos seguía sin cumplirse.

La reacción fue inmediata. Rospigliosi comenzó a denunciar por prevaricato a los magistrados que rechazaban las leyes aprobadas por el Congreso. Al mismo tiempo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), controlada por el fujimorismo y sus socios políticos, empezó a afilar la guillotina contra los magistrados que se resistían a aplicar las nuevas leyes. Los primeros nombres no tardaron en aparecer.

El Parlamento, entonces, fue un paso más allá. En junio de este año aprobó una reforma al Código Penal Militar Policial que establece que los presuntos delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean conocidos exclusivamente por el fuero militar-policial.

La norma obliga, además, a que los jueces civiles archiven las investigaciones cuando exista un proceso abierto en la jurisdicción castrense. Es decir, traslada esos casos fuera de la justicia ordinaria.

Pero el paquete todavía no estaba completo. Esta semana la Comisión de Constitución aprobó un nuevo proyecto de Rospigliosi sobre el delito de lesa humanidad. La iniciativa modifica la definición vigente del Código Penal

y, según especialistas en derechos humanos, vuelve a abrir una puerta para favorecer a militares y policías procesados por graves violaciones a los derechos humanos.

Rivera cree que las dos últimas iniciativas –el traslado de estos casos al fuero militar y la nueva regulación del delito de lesa humanidad– no buscan resolver únicamente los procesos abiertos por los crímenes del pasado. “Son normas claramente pensadas hacia adelante. Buscan establecer las reglas bajo las cuales actuarán las Fuerzas Armadas y la Policía si el próximo gobierno enfrenta nuevas protestas sociales”, afirma.

El blindaje judicial no fue la única señal. Durante el mismo periodo, el Congreso también aprobó mejoras en el régimen de

pensiones para militares y policías, bonificaciones para los veteranos de la pacificación nacional, un incremento de la asignación económica para quienes cumplen el servicio militar y proyectos de inversión para fortalecer la infraestructura de la Marina de Guerra y el Ejército. El paquete terminó yendo mucho más allá de las leyes de impunidad.

“Ahí es cuando todo cobra lógica”, dice Rivera. “La oferta del fujimorismo ha sido: nosotros los vamos a limpiar de cualquier investigación, de cualquier proceso, de cualquier juzgamiento y de cualquier intromisión de la justicia ordinaria”, señala. A su juicio, ese compromiso explica el conjunto de iniciativas aprobadas durante los últimos meses. “Han construido un nuevo marco legal”, advierte.

Para el abogado el objetivo trasciende los expedientes judiciales. “Lo que han buscado es construir una relación de protección con las Fuerzas Armadas. Hacer de los militares una clientela cautiva para fortalecer una base de apoyo a favor de Keiko Fujimori”, asegura.

Ese vínculo –sostiene– cumple una función política precisa. “Han sentado las bases de lo que consideran el mayor esquema de estabilidad: el de los fusiles”, sostiene el abogado.

Rivera encuentra el antecedente en el propio régimen de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000. “No hay autoritarismo sin militares. Un gobierno que pretende ser autoritario no se sostiene solo con decisiones políticas. Necesita el respaldo de las armas y del poder militar”, afirma.

Las leyes de impunidad, la persecución sobre los jueces que se niegan a aplicarlas y los beneficios otorgados a los institutos armados forman parte, en su opinión, de ese mismo plan.

Tres décadas después el fujimorismo vuelve al poder con relativa mayoría parlamentaria, un control sobre las instituciones de justicia y una estrecha alianza con las Fuerzas Armadas. Como en los años noventa. ■

Sánchez insiste: "Este gobierno no será legítimo"

► Sabe que el recurso presentado tiene poco futuro pero subraya que el fraude pudo ser posible después de que se cambiaran las reglas del recuento de votos en el exterior



"Ahora voy donde la Asociación de Víctimas de diciembre del año 22 y enero del año 23 y, ¿qué le digo? ¿Que acepte y dé legitimidad a un gobierno que no reconoce la justicia?", dice Roberto Sánchez a este semanario. (Fotos: Joel Durán/H13).



Los 32 diputados y 14 senadores de Juntos por el Perú durante una de las sesiones de capacitación en el hotel Kingdom, de Lince, ayer jueves. El objetivo es que la bancada no se parta.

ELIA Y. DIZ

El martes 23, minutos después de las 9:30 de la mañana, Roberto Sánchez dio un giro de timón. Anunció que no reconocería la proclamación de Keiko Fujimori. Alegó que había un “fraude en desarrollo” con los votos del extranjero. A la heredera de Alberto Fujimori, que al cierre de esta edición tiene 44,453 votos más que su contrincante, no se le arrugó la sonrisa ni por un nanosegundo. Está segura de que el 28 de julio se instala en Palacio.

En las mesas nacionales JP le ganó al fujimorismo. Tiene el 50,102% frente al 49,898% de Fuerza Popular. Son los votos del extranjero los que han volteado el tablero. Y son esos los votos que Juntos por el Perú cree que son hechizos. El problema es que no lo pueden probar.

“Hemos solicitado información sobre la cadena de custodia, información sobre el envío de las actas del extranjero. De eso ya hace una semana y no nos responden”, dice Roberto Sánchez a este semanario.

“El voto del peruano en el exterior vale tanto como el voto del peruano que vive en el territorio. Lo que nosotros estamos poniendo en cuestión es que, entre la primera y segunda vuelta, ocurrieron afectaciones graves a la seguridad jurídica. Es decir —señala Sán-



De izquierda a derecha, Marco Zevallos, Roberto Sánchez y Roy Mendoza. “La directiva sobre los cambios no fue publicada en su integridad en ‘El Peruano’. Y cuando nos reunimos con la ONPE, días antes de las elecciones, se trataron otros temas. Nunca se nos comunicó que habían modificado estas otras normativas”, explica Mendoza.

chez—, cambiaron las normas”.

“Lo que nosotros señalamos —interrumpe el abogado del partido Roy Mendoza Navarro— son afectaciones que encierran vicios en el procedimiento. Y esos vicios vulneran la Ley Orgánica de Elecciones, en específico el artículo 13.º de la Ley 26809 y la Constitución. El proceso no ha sido transparente. No

se escanearon o digitalizaron las actas. No se respetaron los procedimientos respecto a las valijas diplomáticas. Se añadieron reglas para que los funcionarios consulares puedan ser miembros de mesa en la etapa del escrutinio. Por eso solicitamos la nulidad de los votos”.

Sánchez y Mendoza reconocen que la legislación perua-

na sólo contempla el fraude electoral cuando se da en la mesa de votación. Pero si uno se acoge estrictamente a ese estatuto —señalan a dúo— entonces el fraude del 2000 no existió.

¿Por qué se hicieron los cambios? Ni Sánchez ni sus abogados quieren especular. Quienes lo tienen claro y son explícitos son Sinesio López

y Hernando Cevallos.

“A la mañana siguiente del flash electoral empiezan a circular los audios de Chlimper (...). ¡Y sorpresa! Esa misma noche sale el señor Torres, de IPSOS, a repetir el mismo cuento”, dice a este semanario Sinesio López, miembro del equipo técnico de JP, sociólogo y analista político de la Pontificia Universidad Cató-

lica del Perú.

"Luego empiezan a darse las demoras de las actas, que además no llegaron digitalizadas (...). De por sí, estas demoras inducen sospechas. Es probable que hayan sido manipuladas", mantiene López.

"Esto además se tiene que entender a nivel regional –añade el académico–. Se tiene que entender que el fujimorismo, una fuerza fascistoide, forma parte de un juego a nivel latinoamericano con Trump a

era irrenunciable, aceptó la renuncia. ¿Y qué tienen en común todos esos organismos? Que están controlados por el fujimorismo –sostiene–. Yo conozco a Corvetto. Y conociéndolo como lo conozco, sé que no se quiso prestar a cambiar los reglamentos en pleno proceso. ¿Y qué es lo primero que sucede tras la salida de Corvetto? Quien lo reemplaza modifica las reglas".

"El fujimorismo lleva trabajando mucho tiempo para

Roberto Sánchez? El pueblo será el primero en espetarle si fue él quien aceptó un triunfo ilegítimo".

El verdadero problema –admite Cevallos– es que Roberto Sánchez debió haber levantado la voz "antes y con mucha más fuerza". "Debió y debe explicar mejor la situación. Creo que sus abogados no lo han explicado de la mejor manera (...). Hace poco yo le dije: 'Oye, ¿qué es eso que hay una movilización espontánea

"Cuando ocurren excepciones regulatorias, siempre se tiene que notificar a las fuerzas políticas. Nuestro partido –asegura Sánchez– no fue notificado".

Así que, según cuenta, empezaron a armar el rompecabezas con los audios de Chlimper. "Ahí recién tratamos de conseguir la documentación para saber si estaba bien encausada. La primera respuesta la obtuvimos de la Cancillería. Allí nos dijeron

23 y, ¿qué le digo? ¿Que acepte y dé legitimidad a un gobierno que no reconoce la justicia? –se pregunta el candidato–. ¡No! El que quiera reconocerlo 'democráticamente', que lo haga, nosotros representamos el sentimiento popular, el sentimiento de nuestras bases".

Roberto Sánchez reconoce que en el frente político que se armó para la segunda vuelta no todos están de acuerdo con la decisión. "Es parte de la democracia, ¿no?", dice.

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros anunció su retiro del equipo técnico este miércoles. Pedro Francke y Gustavo Guerra García han guardado riguroso silencio. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, anunció que sí respetará los resultados.

"Él entiende que estamos actuando dentro del marco de lo legítimamente correcto según la ley", dice Sánchez, quien asegura que conversó con López Chau antes de la rueda de prensa. El que sí se sumó a la decisión fue Ricardo Belmont.

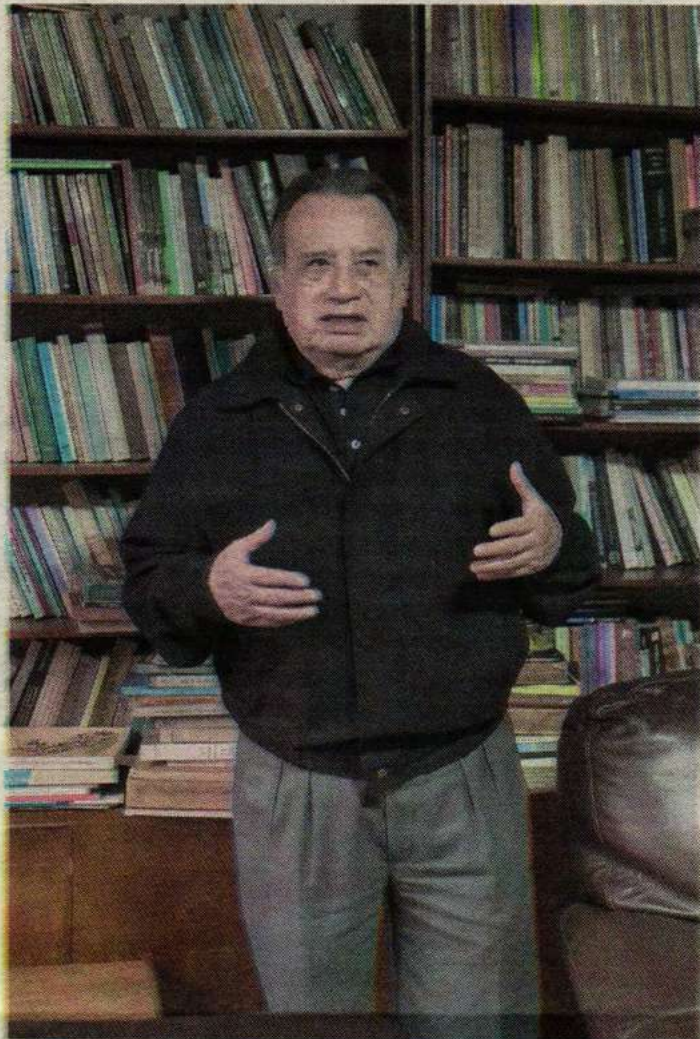
"Todo el mundo sabe que esto ha sido fraude", dijo Belmont en un video titulado "Sánchez en busca de la verdad", publicado en sus redes sociales este miércoles.

Fujimori ni se inmutó. "Creo que esto sí es un acto desesperado de política y estoy segura de que ni este Congreso ni el próximo hará caso a la denuncia", dijo. "No existe ninguna evidencia", añadió para dar por zanjado el tema.

En el equipo de Sánchez son conscientes de que el recurso presentado tiene pronóstico reservado. Lo que les queda es tratar de construir una oposición en el Senado y el Parlamento.

"¿Ustedes se creen que va a haber espacio para la oposición democrática con el fujimorismo? –advierte Cevallos– (...). A mí y a ocho más la procuraduría nos ha planteado una denuncia penal simplemente por decir que debemos proteger nuestros votos y la democracia (...)."

"Necesitamos ser capaces de mantener una bancada unida –añade el exministro de Salud–. Seguro que hay parlamentarios que vendrán de lugares humildes, pero luego se dedican a hacer lobbies, maltratar a su gente y traicionar la bandera, como terminó Perú Libre".



"Se está coordinando para tener una coalición. Una presencia más o menos unitaria en el Congreso y evitar que el fujimorismo lo tome totalmente (...). Fujimori tiene todo el aparato estatal a su favor. Ha comprado a las Fuerzas Armadas. Y eso lo va a usar e imponer en todos los otros escenarios. Yo de verdad espero que se logre esa coalición", dice a este semanario Sinesio López, miembro del equipo técnico de JP, sociólogo y analista político de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

la cabeza (...). La jugada está clara desde Colombia hasta el Perú. Y si ese no es el caso, ¿qué hacía el embajador estadounidense como observador? ¿Somos acaso una colonia para que ese embajador se meta a la ONPE, al Jurado Nacional de Elecciones?"

Y lo más raro –apunta López– es la renuncia del señor Corvetto.

"Tras la primera vuelta, empieza la presión para que Corvetto renuncie. Amenazaron su vida y la de sus hijos. Y el JNE, sabiendo que el cargo de Corvetto es irrenunciable, lo presionó para que salga. La Junta Nacional de Justicia (JNJ), sabiendo que el cargo

asegurarse de que no se les escape esta elección. Y JP, que tiene mucho menos experiencia, no diseñó un plan de contención", dice el exministro de Salud Hernando Cevallos, invitado de la coalición de Juntos por el Perú y miembro del equipo técnico de Sánchez.

"Hubo malas intenciones cambiando las normas, no es fruto del azar –dice el pediatra–. Y ante estas irregularidades, ¿qué podemos hacer? Si se sospechan alteraciones en las actas, ¿cómo le decimos al pueblo que se calme? Cuando el fujimorismo asuma el gobierno y se muestre como realmente es, ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué les dirá



"Necesitamos ser capaces de mantener una bancada unida (...). [Los fujimoristas] son capaces de chantajear y presionar. Si pueden, lo harán. Y corremos el riesgo de sufrir el mismo destino que Perú Libre", dice a este semanario el exministro de Salud, Hernando Cevallos, invitado de la coalición de Juntos por el Perú.

autoconvocada? Tiene que haber liderazgo, ¿no? Tienes que ponerte al frente. ¿Te vas a sentar a tomar un café con la señora Fujimori, darle la mano y contentarte?", narra Cevallos.

Sinesio López dice que este cambio de estrategia en Juntos por el Perú empezó a diseñarse hace diez días. Y Cevallos dice que se enteró por los medios, después de la conferencia de prensa del martes.

Roberto Sánchez trata de explicar por qué la demora. Dice que "en el calor de la campaña no se percataron" de los cambios en las normas electorales. "Recién pusimos allí el ojo –cuenta– tras ser alertados por una misión de observación electoral".

que el ente encargado era la ONPE. Y cuando le pedimos la documentación a la ONPE, nos dijeron que los cambios los había pedido la Cancillería –explica Roberto Sánchez–. En ese cruce, tuvimos que empezar a escarbar en documentos que no habían sido publicados originalmente".

"No nos percatamos qué tan extremo podría ser un cambio de la norma. No nos percatamos que tendríamos que llegar al fondo del documento para saber que habían desregulado las normas y, por ejemplo, quitado la obligatoriedad de la digitalización", señala el candidato de JP.

"Ahora voy donde la Asociación de Víctimas de diciembre del año 22 y enero del año

Mecánica de la naranja

► El fujimorismo ha empezado a llamar a adversarios en busca de un Congreso que cante a dúo con la presidenta

ELOY MARCHÁN

Keiko Fujimori tiene el tablero a su favor para gobernar como una reina. La tendencia al divisionismo dentro de Juntos por el Perú, el silencio sospechoso del Partido del Buen Gobierno y la escopeta de dos cañones de Obras juegan a favor de la señora K.

La jefa de Fuerza Popular baraja para presidir el Senado a Miguel Ángel Torres y Martha Chávez. Para la Cámara de Diputados a Cecilia Chacón y Diethell Columbus. Sea como fuere, los cuatro son de extrema confianza de Fujimori.

Torres tiene luz verde para empezar a sondear apoyos y pescar aliados. Ha comenzado una rueda de conversaciones para armar una posible mesa directiva. Está buscando que lo acompañen en las vicepresidencias Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras. En ese orden, "Miki" ha ofrecido las tres vicepresidencias que tiene el Senado.

Para convencer a los posibles satélites de que atraquen con una mesa directiva fujimorista el primer año de gobierno, Torres ha esgrimido argumentos como que "se necesita la gobernabilidad" del país, la "necesidad de hacer cambios urgentes" y de tener una "fluida comunicación entre Ejecutivo y Legislativo".

Y para ponerlos en la órbita del gobierno, ha des-

lizado que aceptarían la creación de una comisión legislativa para que revise las leyes procrimen, "ceder" la Comisión de Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y buscar "el mayor consenso" para elegir a los directores del BCR, uno de los primeros trabajos con los que deberá cumplir el Senado cuando se instale.

Dos senadores electos con los que Torres ha hablado indican que el fujimorista repite como mantra que es necesario "cerrarle el paso a los izquierdistas radicales" y que en el nuevo Congreso habrá gente con "la que no se puede dialogar".

"(Hay) facciones de grupos terroristas. Hoy tendríamos personajes que habrían estado ligados a esas bandas criminales. Es difícil lidiar o consensuar con esas personas. Son muy drásticos en sus pensamientos", dice Héctor Ventura, virtual senador de Fuerza Popular. En esa lista negra están Íber Maraví, Serafín Luján, Moisés Chipana, Marlon Aguirre y César Tito, todos en las filas de Juntos por el Perú.

Al fujimorismo solo le basta sellar un acuerdo con Renovación Popular para llegar a los 30 votos, lo que representaría el 50% del Senado. En la Cámara de Diputados la tienen más difícil: juntos llegan a 56 de las 130 curules, es decir al 43%.

En el partido de Rafael López Aliaga todos piensan que el fujimorismo es su aliado natural, pero hay diferencias cuando se habla

Ricardo Belmont: está jugando a la escopeta de dos cañones. Se encuentra en conversaciones con la oposición, pero también con el fujimorismo.



Jorge Nieto: apostando, como siempre, al misterio.



FOTO CÉSAR ZAMALLÓN • HT3

del grado de subordinación al partido de la señora K. Norma Yarrow, diputada electa de Renovación Popular, cree que con Fuerza Popular no se debe hacer una alianza sino solo un "acuerdo entre bancadas".

"Los acuerdos y consensos se deben llevar a cabo para poder tener una gestión donde se priorice el país y sus necesidades. Conversar no es pactar. Me he sostenido siempre como una oposición responsable que quiere la gobernabilidad", sostiene Yarrow.

El nombre de Yarrow sueña para integrar la mesa di-

Fujimori. Lo más factible es que *madame* K pida que los tratos sigan haciéndose entre Barragán y Torres.

En Obras juegan a doble banda. Mientras se han acercado a conversar con el fujimorismo, le han dicho a Juntos por el Perú y Ahora Nación que están interesados en armar un bloque de oposición que haga frente a Fuerza Popular. El acuerdo sería tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.

Hasta el momento ha habido dos reuniones de coordinación y habrá una tercera este fin de semana. No se descarta que luego de

de las voces con más peso en el partido que lidera Jorge Nieto, pero nos dijo que la jefa de prensa de su partido nos llamará. La comunicación nunca llegó.

"No sabemos qué pretenden en el Partido del Buen Gobierno. Están muy cerrados, no quieren hablar. A estas alturas solo nos queda hacer un esfuerzo para estar unidos y evitar que Fuerza Popular tenga todo el poder. Eso es muy negativo para la democracia", dice Mirtha Vásquez, senadora electa de Ahora Nación.

El partido de Nieto tiene 7 senadores y 18 diputados

favor de la impunidad que están dejando".

En Juntos por el Perú, con 32 diputados y 14 senadores, quieren ser optimistas. Apuestan por concretar un bloque con Ahora Nación y Obras. Lo cierto es que lo más difícil será lidiar con la fuerza centrífuga. En ambas cámaras, todavía por instalarse, hay tres facciones: los castillistas, los militantes del partido y los excongresistas de Perú Libre. "Muchos venimos de distintas procedencias, algunos vienen de la fuerza castillista, otros venimos del partido, pero eso no significa que



FOTO JOEL DURÁN • HT3

Miguel Ángel Torres: es la primera opción de Keiko Fujimori para la presidencia del Senado. Torres está en conversaciones con Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras.



FOTO ARCHIVO • HT3

Cecilia Chacón: es la candidata favorita de la señora K para la presidencia de la Cámara de Diputados. Fujimori quiere gente de su extrema confianza dirigiendo las dos cámaras.



FOTO CÉSAR ZAMALLÓN • HT3

Héctor Ventura: el senador fujimorista confirma que buscarán aislar a los congresistas de la "izquierda radical". "(Hay) facciones ligadas a bandas criminales. Es difícil lidiar o consensuar con esas personas", dice.

rectiva en la Cámara de Diputados que viene armando Cecilia Chacón. Las cartas de Renovación Popular para el Senado son Lourdes Alcorta y Alejandro Muñante.

Daniel Barragán es el interlocutor de Obras en las negociaciones con "Miki" Torres. Ambos se reunieron hace dos semanas en la casa del fujimorista, en Surco.

Barragán, según fuentes, le dijo a Torres que para cerrar un trato antes debe haber una cumbre entre Keiko Fujimori y Ricardo Belmont. Hasta el cierre de esta edición, el hermanón seguía esperando la llamada de la

esa cita se oficialice el trato y los voceros se tomen una fotografía juntos.

La oposición también ha empezado a armar una lista para la mesa directiva del Senado. Suenan los nombres de Mirtha Vásquez e Íber Maraví como posibles cabezas de lista. Para la Cámara de Diputados aún no hay opciones serias.

El Partido del Buen Gobierno ha sido invitado a las reuniones de la coalición de oposición, pero han comunicado que por ahora no participarán del bloque. Este semanario buscó conversar con Patricia Iturregui, una

electos. Saben que serán parte del fiel de la balanza en el nuevo Congreso. Una fuente cercana a Nieto cuenta que al fujimorismo le han dicho que les interesa presidir las comisiones de Fiscalización, Constitución y Ética.

Mirtha Vásquez cuenta que no descartan invitar a Renovación Popular a la mesa de reuniones del bloque opositor. "Algunos de Renovación -anota Vásquez- han mostrado su deseo de conversar a nivel de senadores y diputados. Con el fujimorismo sí no habrá conversaciones porque no son una fuerza democrática. Miren todas las leyes en

haya una división", dice Ernesto Zunini, diputado electo por Lambayeque.

Sostiene que para concretar un bloque de oposición que haga frente al fujimorismo, en JP están dispuestos a hacer "desprendimientos" en favor de Ahora Nación y Obras.

"Nosotros tenemos una preocupación muy fuerte por las últimas leyes que ha aprobado el Congreso. Son leyes de carácter autoritario. Por eso es relevante que algunas comisiones clave estén en manos de la oposición, no necesariamente en Juntos por el Perú, pero sí en la oposición", dice Zunini.



Haciéndose Humala

► El líder de A.N.T.A.U.R.O. exige que el director de esta revista se disculpe. Sólo así aceptaría ser entrevistado

Antauro Humala aceptó recibir a este semanario, pero cuando los periodistas llegaron a su local de Santa Beatriz cambió de opinión y condicionó el encuentro a un pedido de disculpas del director de la revista. "Lee tus editoriales, son insultativos. Tiene que haber unas disculpas por parte de ustedes. No, ahí nomás", dijo.

FABRICIO CABRERA BUDEN

Desde que acabó la segunda vuelta presidencial, Antauro Humala pasa los días en una casona de la urbanización Santa Beatriz, en el Cercado de Lima. El inmueble gris y blanco es la sede de A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obras). En la puerta hay un cartel promocionando un combo de 50 soles que incluye un libro, un autógrafo y un selfie con Antauro.

"Claro, si pagas, el mayor sale, te firma tu libro y se toma una foto", explica uno de los vigilantes etnocaceristas que está apostado en la cuadra ocho de la calle Torres Paz.

Por estos días, por la casona desfilan abogados, asesores, dirigentes y alguno que otro congresista electo. Las reuniones matutinas están reservadas para el círculo de confianza del líder. Son piñones fijos su abogada Carmen Huidobro, su asesor Jorge Miranda y los etnocaceristas Pilar Roca, Sixtilio Dalmau y David Tejada.

Uno de los temas que sigue en la agenda es conseguir la inscripción del partido, declarada ilegal por el Poder Judicial al considerar que su líder promueve posiciones antidemocráticas, como el fusilamiento de expresidentes condenados por corrupción, el elogio a Sendero Luminoso y expresiones xenófobas dirigidas contra migrantes.

Carmen Huidobro, abogada de Humala desde hace más de 20 años, se encarga de la estrategia jurídica para conseguir el registro electoral del etnocacerismo. La apuesta pasa por el Tribunal Constitucional. "El primer y el objetivo central es recuperar el partido. Lo que dijo el mayor eran propuestas de campaña y el propio TC ha señalado que no constituyen un lenguaje de odio", sostiene Huidobro.

Por estos días, sin embargo, el tema más importante es la estrategia que seguirán ante el inminente gobierno de Keiko Fujimori. Hace unos días Tomás Soldevilla Guerra, uno de los fundadores del partido A.N.T.A.U.R.O., presentó un hábeas corpus para im-

pedir una eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta hasta descartar que tenga nacionalidad japonesa.

Pero Humala parece haberse encerrado en su propio laberinto. Mientras su entorno diseña una estrategia para poner en duda la peruanidad de Fujimori, el líder ha empezado a hablar de un "Pacto de la Moncloa" a la criolla. El objetivo, según el entorno de Humala, es reunir a las fuerzas que respaldaron a Keiko Fujimori y a los sectores que apoyaron a Roberto Sánchez para alcanzar acuerdos mínimos de gobernabilidad.

Así lo confirma David Tejada, jefe del Plan de Gobierno de A.N.T.A.U.R.O. y uno de los principales

colaboradores de Humala. "No veo contradicción con pedir que Fujimori muestre si tiene doble nacionalidad y pedir que se unan fuerzas. La política es consenso y coerción, palos y zanahorias. Hay una nueva correlación de fuerzas en el país y eso se tiene que reflejar en el intento de proyecto nacional", dice.

Pilar Roca, dirigente etnocacerista e integrante del círculo más cercano de Humala, evita hablar de una alianza con el fujimorismo. Prefiere presentar la propuesta como un entendimiento entre fuerzas políticas. "Yo no lo interpreto así. (...) Lo que tiene que entender la señora Keiko es que hay un país dividido y tiene que gobernar para todos", dice.

Antauro Humala sigue convencido de que su partido fue borrado del menú electoral porque lideraba las encuestas de Apoyo. Y en una reciente exposición culpó a la izquierda moderada del resultado de segunda vuelta. “La angustia que podía desembocar en una derrota la atribuyo a la mala selección de refuerzos en la segunda etapa del proceso electoral. No era necesario volverse rosaditos”, dijo.

Sobre la representación en ambas cámaras, Antauro, habitualmente grandilocuente, ha optado por la discreción. Dijo que cuenta con presencia en el Parlamento y mencionó a dos congresistas electos. El problema es que ellos lo niegan.

Serafin Luján, senador electo por Huánuco de Juntos por el Perú, afirmó a este semanario que mantiene una relación de años de amistad con Antauro Humala, pero niega ser invitado suyo.

“Lo que nos une es el tema cocalero, yo soy dirigente. Desde hace años lo conozco, pero no tengo nada que ver con él. Sí, me reuní en su local partidario el último viernes por la tarde, pero sólo hablamos de política nacional y la problemática cocalera”, señaló Luján.

Marlon Aguirre, diputado electo por Junín de Juntos por el Perú, reconoce que llegó al Congreso por invitación de Humala, pero niega que vaya a seguir las órdenes del líder etnocacerista.



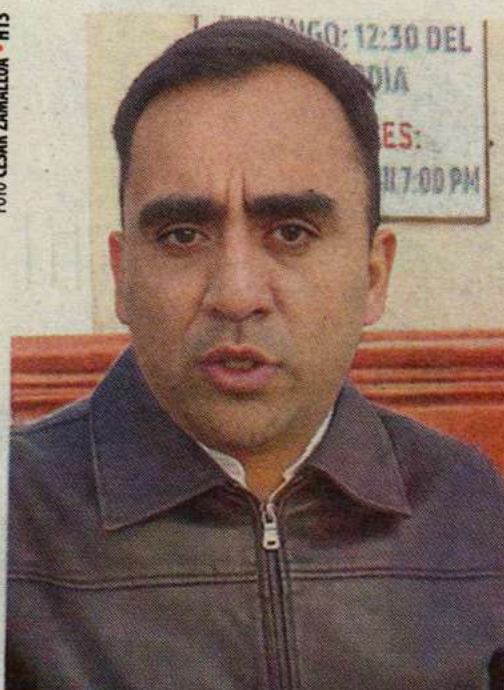
Andrea Medina, diputada electa por Obras: en la campaña de 2021 apareció en videos donde pedía la libertad de Antauro Humala y gritaba: “¡Antauro libertad!” y “¡Por el Perú, carajo!”. Hoy niega cualquier vínculo con el líder del Andahuaylazo. “Fue netamente por campaña. No tengo ninguna relación con Antauro, no lo conozco”, dice.



Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala: “El primer objetivo es recuperar el partido. La Corte Suprema ya dijo que las declaraciones de Antauro son propuestas de campaña que pueden ser o no aceptadas por la población, pero que no son del todo una amenaza”, señala.



Serafin Luján, senador electo de Juntos por el Perú: Antauro Humala también lo considera parte de su representación en el Congreso. Luján niega haber llegado por invitación del líder etnocacerista: “Lo que nos une es el tema cocalero. Lo conozco desde hace años, pero hasta ahí. No tiene ningún sentido que me vaya con él”.



Marlon Aguirre, diputado de Juntos por el Perú: militó en el partido de Antauro Humala y reconoce que llegó al Congreso como parte de la cuota acordada con Roberto Sánchez. El líder etnocacerista lo considera uno de sus legisladores, pero Aguirre se desmarca: “No me voy a ir de la bancada. Tengo decencia y soy agradecido con Juntos por el Perú”.

“Yo estaba afiliado al partido de Antauro, pero como no se dio el tema de la inscripción me invitaron al de Roberto Sánchez. Entré como cuota de invitados (...) Yo no me voy a mover de mi bancada. Tengo decencia y soy agradecido con Juntos por el Perú, que me dio la oportunidad de ingresar”, señala Aguirre.

Andrea Medina es una diputada electa por el partido Obras. El 2021 se hizo viral en algunos videos de redes sociales gritando: “Antauro libertad”. Hoy niega que tenga algún vínculo con el líder etnocacerista. Alega que siguió directrices del líder de su partido, Ricardo Belmont.

“Hice campaña política en el 2021 levantando esa bandera porque era parte de la alianza de varias agrupaciones políticas. Fue netamente por campaña. No tengo ninguna relación con Antauro, no lo conozco”, señala.

Solicitamos una entrevista con Antauro Humala y nos citó para el último martes en su local de Santa Beatriz. Cuando llegamos, había cambiado de opinión.

Su asesor señaló que la entrevista solo se realizaría si el director de esta publicación ofrecía disculpas por “las injurias que le hicieron al mayor”. Minutos después Antauro salió del local y zanjó el asunto: “Por una cuestión de principios no quiero la entrevista. Lee tus editoriales, son insultativos. Tiene que haber unas disculpas por parte de ustedes. No, ahí nomás”, dijo. ■

Gentilicios mundialistas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha deparado algunos resultados sorprendentes, como el empate de Curazao (o Curasao) ante la favorita selección ecuatoriana. Probablemente algunos espectadores se preguntaron por primera vez, luego del partido, sobre la ubicación exacta de este país de algo más de 150 000 habitantes —se trata de una pequeña isla del Caribe situada a unos 65 kilómetros de la costa septentrional de Venezuela— y no pocos sobre cómo se denomina a sus habitantes.

Sobre esta última inquietud debemos decir que el gentilicio es «cu-

razoleño», aunque el «Diccionario panhispánico de dudas» («DPD») considera asimismo válida la variante «curazaleño». En cambio, no debe usarse la grafía «curazuleño», presente en textos como «Hubo un responsable clave en este duelo, el golero del cuadro curazuleño, Eloy Room, de 37 años» (emol.com, 20/6/2026) o «Pero la figura excluyente fue el arquero curazuleño, quien tapó casi todo lo que tiraron

los ecuatorianos (...)» (a2toques.com.ar, 21/6/2026).

Otro país que ha dado la sorpresa en este Mundial es Cabo Verde. En este caso, el gentilicio es «caboverdiano», por lo que resultan incorrectas formas como «caboverdense», «caboverdeño» o «caboverdino», empleadas en algunos textos periodísticos. Consignamos aquí dos (malos) ejemplos: «Después, Vozinha, portero caboverdense, también

tuvo protagonismo: despejó a córner el cabezazo de Oyarzabal (...)» (lazon.es, 15/6/2026); «Lo cierto es que esta anotación magistral pasará a la historia del fútbol caboverdino (...)» (winsports.co, 21/6/2026).

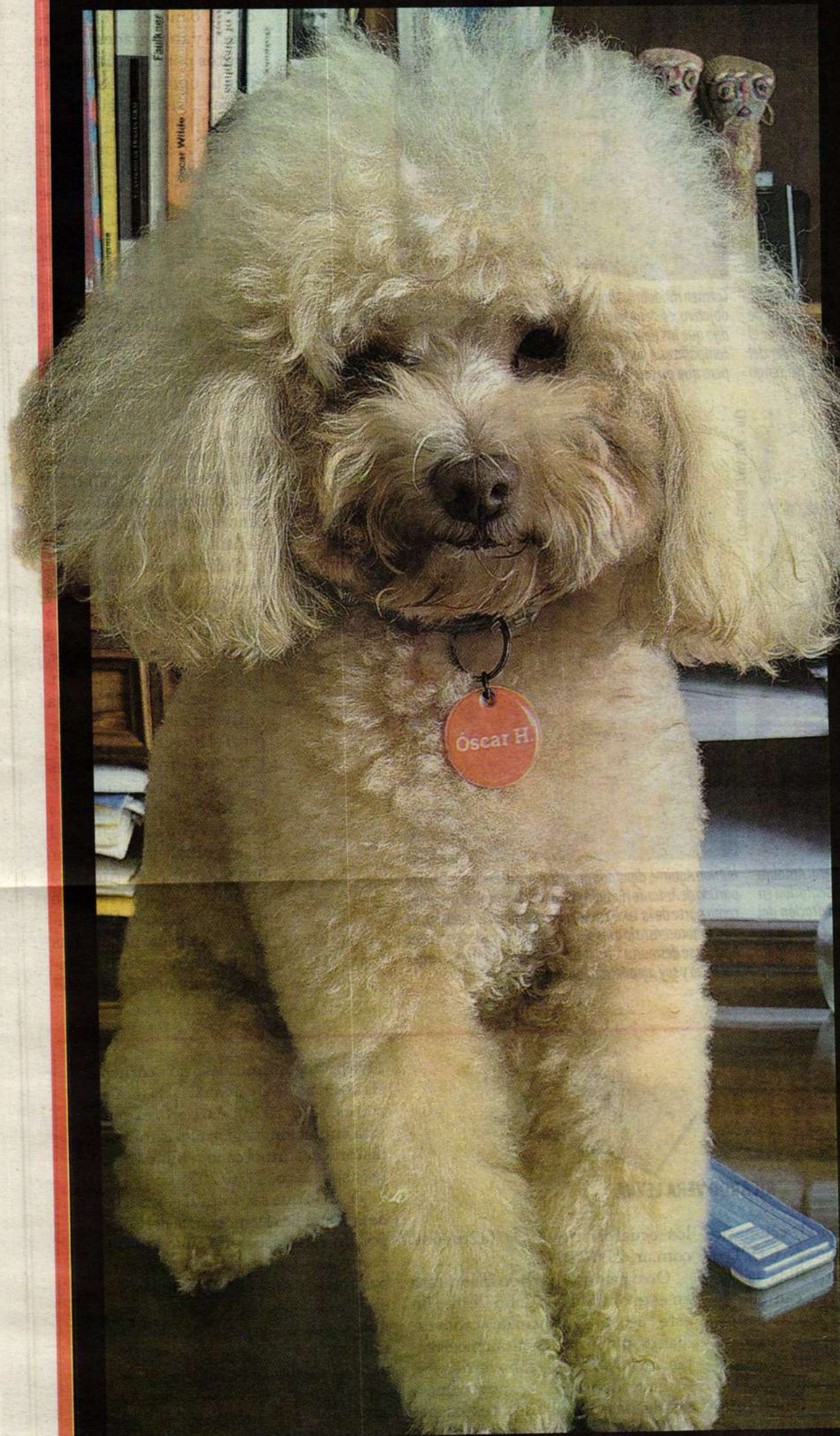
¿Y en lo que respecta al gentilicio de la República Democrática del Congo? En este caso son válidos tanto «congolés» como «congoleño». Ambas formas aparecen recogidas en el «Diccionario de la lengua española» («DLE») y pueden utilizarse indistintamente para designar a los habitantes de ese país africano. Sea como fuere, no debe confundirse con la República del Congo, país vecino con el que comparte no solo buena parte de su nombre, sino también los gentilicios. ■

Tribunal del Santo Oficio

RICARDO VERA LEYVA



Tiempos de desafíos



Hemos luchado por lo que creemos y estamos orgullosos de los principios que hemos defendido y de las formas en que hemos ejercido nuestra función crítica e independiente. No tenemos nada de qué arrepentirnos. Sabemos ahora qué oleaje de revanchas, mezquindades y provocaciones nos espera. Aquí estaremos, más firmes que nunca.

Dispuestos a seguir enfrentándonos con quienes se acostumbraron a hacer del país un feudo personal, una subasta y un coto de caza.

No sabemos hacer otra cosa que hacer periodismo y lo seguiremos haciendo, con todas nuestras ganas y sin buscar ni halagos ni reconocimientos.

Lo que es cierto es que hoy, más que nunca, dependemos de quienes nos leen y quienes nos ven y escuchan. Esperamos seguir contando con ustedes en esta batalla por la persistencia. Resistir es un deber ante el desafío que le plantea al Perú una casta habituada a concentrar el poder y arrasar con quienes se ponen en su camino. Aquí estamos. Con ustedes y gracias a ustedes.



(CÓDIGO QR SÓLO PARA DONACIONES)

La tolerancia suicida



JUAN MANUEL ROBLES

La nueva ley aprobada por el Congreso para dar más impunidad a policías y militares, al punto de que sus crímenes puedan ser investigados solo en su propio fuero, es un eco de los resultados electorales. Se ve en la forma, en el ímpetu (el apetito). Es una acción apresurada por Fuerza Popular y sus aliados sabiendo que se viene más poder que nunca, con sonrisita de Rospi y espaldarazo de la Policía (la misma policía que amenaza a Claudia Cisneros y a otros activistas por decir lo que piensan). Los “ganadores” —que no ganaron en el Perú y que en el extranjero tuvieron un conteo sospechoso— perdieron todo límite y pudor: hacen aprobar una ley trascendental como esa sin debate, como quien tramita algo, terminando de convertir al parlamento en la mesa de partes que era en los tiempos oscuros de Montesinos, esos tiempos que ya vuelven.

Y a mí no deja de sorprenderme que los votantes de Keiko sepan perfectamente que esto ocurre por la voluntad de la candidata que eligieron, que sean conscientes de que bajo el nuevo orden ocurrirán más legalidades de ese calibre —calibre, ja—, y aún así defiendan su voto o se lo tomen a la ligera por eso del “miedo al comunista”. Gracias a esta norma —que no es una medida aislada sino que forma parte de un entramado planeadísimo— policías y militares podrán torturar, lesionar y asesinar sabiendo que todo se resolverá en las cuatro paredes de su institución. No es necesario hablar en abstracto: casos recientes nos hacen ver que estos abusos y agresiones violentas ocurren cotidianamente, y que hay más oscuridad que lucha contra el crimen.

Porque la lucha contra el crimen es solo una excusa. Ninguna ley de blindaje a policías y militares, ningún marco legal para darles más protección al usar las armas de ley —y han sido varios en los últimos años de control fujimorista—, ha disminuido un ápice el crimen y la inseguridad. Los delincuentes

no se han visto más amenazados. Al contrario, lo que termina ocurriendo es que los policías se empoderan y las comisarías se vuelven búnkeres para la extorsión.

Sin embargo, veo votantes de Keiko —no hablo solo del núcleo duro sino de los que dicen tener cierta capacidad de análisis, los que declaran no ser “fujimoristas” pero afirman que votaron por ella porque “maduraron”— que solo atinan a alzar los hombros, con

ese gesto que ya les conocemos, el ya-no-hablemos-de-política-cholito, ya terminaron las elecciones.

Entonces uno vuelve a pensar, maravillado, en esa creencia mágica que hace robustecer a las derechas de todos los tiempos, y específicamente a las derechas de estas épocas estridentes. El convencimiento de que esas amenazas no tienen que ver contigo y no te tocarán a ti. Que esas medidas no te afectarán porque eres un ciudadano de

que conozcan el poema de Niemöller (“Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio...”) pero al menos podrían tener un poco de memoria e información.

El primer fujimorismo se hizo fuerte con un montón de leyes de excepción toleradas por quienes no sentían que aquel entramado les fuera a afectar nunca. La mayor parte de la sociedad civil bienintencionada toleró la interpretación auténtica de la constitución para permitir la segunda reelección, vio callada el hostigamiento a miembros del Tribunal Constitucional incómodos, algo que prefirieron asumir como simples movidas, parte del “juego político”. También observaron en silencio la existencia de un aparato paralelo de gobierno, un asesor con antecedentes criminales moviéndose en la sombra y una televisión de señal abierta que apoyaba unánimemente al régimen.

Años después, muchos de esos hombres y mujeres se dieron cuenta de que el país se había vuelto invivible, de que el gobierno se quería perpetuar en el poder y no había forma de impedirlo, pues ya todo estaba tomado y los mecanismos institucionales no servían. Allí es donde la gente que no solía verse afectada empezó a reaccionar. Hubo hasta grandes empresarios de medios de comunicación que se dieron cuenta de este plan y empezaron a hacerle frente, soportando el asedio de la Sunat y el despojo de sus propiedades.

Suele pasar que esos hombres que no le tomaban mucha impor-

tancia al quiebre institucional toman conciencia luego. Lo malo es que cuando lo hacen ya han transcurrido años en que la mafia consolida su poder y afecta el país. La historia es cíclica y parece que —de nuevo— se repite en el Perú. Una parte importante del país sueña con vivir en el piloto automático de Keiko; cuando se den cuenta de que la concentración del poder daña la vida cotidiana, cuando esos policías empoderados se metan con alguien que les importe, gritarán “dictadura” y uno no tendrá corazón para decirles “te lo dije, idiota”. A veces el pasado vuelve con tal exactitud en el Perú que parece inútil escribir cualquier advertencia. “¿Para qué?”, me pregunto. Pero luego pienso en los comunicadores a quienes leí, por esos años, y que me advirtieron de la barbarie desde tribunas tan pequeñas como esta. Y entiendo que la resistencia ha comenzado y toca alzar la voz, aunque al principio seamos pocos. ■



La policía peruana, del mismo modo que los militares, tendrá ahora patente de corso. La ley está pensada para lo que se viene.

bien y no te metes con nadie. Que esos excesos en la legislación están hechos para delincuentes —tal vez extranjeros— que bien se lo merecen, o para revoltosos que detienen la economía, para terrucos y también, por qué no, para quienes no son terroristas pero podrían serlo.

Es el espíritu recargado de “los derechos humanos son una cojudez”, un lema que renace convertido en consigna nacional con resonancias bukelianas. A mí ya no me sorprende la falta de empatía pero sí la estupidez, la ceguera estadística y la nula visión histórica. Digo: me sorprende que no se den cuenta de que al quitarse derechos elementales estamos en peligro todos, también ellos. Que no sean capaces de ver que en todas las épocas de abusos alguien estuvo en su lugar, en su tonto papel, creyéndose protegido de injusticias que se cometen contra “otros”. No les voy a pedir

A VECES EL PASADO VUELVE CON TAL EXACTITUD EN EL PERÚ QUE PARECE INÚTIL ESCRIBIR CUALQUIER ADVERTENCIA

Urgen nuevas elecciones



ISAAC BIGIO

Este balotaje ha sido el más reñido que ha tenido el Perú. El margen de diferencia equivale a poco más de la cuarta parte del 0,76% con el cual, en 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre aventajó a Fernando Belaúnde. Ante tal situación, se produjo un golpe militar que dio paso a nuevas elecciones doce meses después.

Cuando escribimos estas líneas, falta contabilizar menos del 0,3% de las actas, por lo que los porcentajes finales solo podrían variar en algunas décimas de punto. Tomando en cuenta los 19'623,508 votos emitidos (de los

holgadamente en la presidencia, aunque ha perdido frente a Roberto dentro del territorio nacional y en alrededor del 80% de los distritos peruanos. En el territorio peruano, Roberto Sánchez ganó con 46,835% frente al 46,623% de Keiko, es decir, una diferencia ligeramente superior al 0,212%. Lo que cambia el resultado es el voto exterior: dentro de los 308,169 votos emitidos fuera del país, Keiko obtuvo un contundente 59,355%, frente al 34,552% de Sánchez.

El sombrero, por su parte, pretende imponerse eliminando la votación de toda una región electoral —la de los Peruanos en el Exterior (PEX)—, por

países relativamente pequeños cuyos ciudadanos residentes en el exterior viven en el mismo continente y a corta distancia de su patria. En ambos casos, además, la competencia no era entre polos extremos, sino entre centroizquierda y centroderecha, o entre opciones proeuropeas y prorrusas, sin propuestas de retorno a dictaduras previas a 1991.

En el caso peruano es distinto, pues la gran mayoría de la diáspora vive a distancias muy lejanas, especialmente en otras masas continentales como Norteamérica o Eurasia, y la candidata vencedora ha prometido un retorno a la época de Alberto Fujimori.

El tema de los PEX ha generado especial sensibilidad entre aliados de Sánchez como Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, pero también entre figuras de centro como Carlos Bruce, de Somos Perú, quien votó contra Sánchez. Esto se debe a las irregularidades que, según diversos sectores, se habrían cometido en el extranjero. Para Sánchez, no se pueden cambiar las reglas entre los dos tiempos de un mismo partido de fútbol ni tampoco entre las dos vueltas de una elección presidencial.

A nueve días de la primera ronda electoral del 12 de abril, dimitió Piero Corvetto como jefe de la ONPE, pese a que la Ley Orgánica establece que dicho cargo es irrenunciable durante un proceso electoral.

Al día siguiente, el 22 de abril, los ministerios clave de Defensa y de Relaciones Exteriores fueron asumidos por personalidades vinculadas al fujimorismo. Entre sus primeras acciones se produjo el cambio de diplomáticos en varias naciones, entre ellas seis repúblicas con alta concentración de PEX, como Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Alemania e Italia.

Posteriormente, se instruyó a los consulados a modificar la forma en que se contabilizaban los votos del exterior. Tradicionalmente, estos se digitalizaban y escaneaban para ser enviados de inmediato a Lima, mientras que las actas físicas se remitían posteriormente en valijas diplomáticas para su cotejo. Esta vez no se digitalizaron ni escanearon y las actas fueron enviadas directamente a Lima. Para Sánchez, al permanecer varios días bajo custodia de dependencias vinculadas a los nuevos ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, estas pudieron haber sido alteradas.

En la primera vuelta hubo 411,077 votantes en el exterior, pero en la segunda solo 328,162. Esto representa una caída superior al 20%. Muchos de quienes no volvieron a sufragar formaban parte de los 76,881 votantes que obtuvo Rafael López Aliaga en el extranjero durante la primera vuelta

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30



Peruanos en el exterior: irregularidades previas y algunas cifras difíciles de explicar.

cuales aproximadamente un 6,5% fueron nulos o blancos), Keiko Fujimori obtiene el 46,836%, apenas un 0,206% por encima del 46,630% de Roberto Sánchez. Ninguno de los dos llegó al 50% de los votos emitidos, mientras que en la primera vuelta ninguno superó individualmente al total de votos nulos y blancos, y la suma de ambos no alcanzaba ni la cuarta parte de los sufragios. Pese a las numerosas acusaciones de irregularidades, Keiko ha vetado el recuento manual de votos, una medida que ella misma demandó en 2021, cuando los resultados no le favorecían.

Un problema que cualquiera de los dos rivales tendrá que afrontar es la falta de una autoridad política suficientemente sólida ante amplios sectores de la población. Keiko quiere debutar

lo que ninguna de estas dos opciones parece ofrecer suficiente legitimidad, lo que hace urgente la convocatoria de nuevas elecciones.

Contando el voto exterior, Keiko gana por unos 40,000 votos (0,2%). Si esos sufragios fueran anulados, Sánchez se impondría por una diferencia similar. Gracias al extranjero, Keiko aspira a convertirse en la primera persona en la historia nacional y continental en alcanzar la presidencia gracias al voto decisivo de la diáspora. Hasta antes de 1980, esta no tenía derechos electorales, por lo que, con la legislación anterior, el sombrero habría retornado a Palacio.

Solo existen dos repúblicas latinas de Europa oriental donde las diásporas han revertido en alguna ocasión el resultado final: Rumania y Moldavia,

EN LA PRIMERA VUELTA, KEIKO QUEDÓ EN SEGUNDO LUGAR EN EL EXTERIOR CON EL 12,76% DE LOS VOTOS EMITIDOS, PERO EN LA SEGUNDA RONDA BORDEA EL 60%

Dos Sánchez



CARLOS LEÓN MOJA

Roberto Sánchez es ahora dos personas. Por un lado, es el líder de la oposición al fujimorismo en todos sus matices —desde institucionales hasta económicos—. Y esto está legitimado por el voto del 49,9% del electorado en la segunda vuelta. Pero Sánchez es también el líder del castillismo, un elector desconfiado hacia un sistema que nunca le ha jugado a favor, y por eso mismo apuesta por cambiarlo sin importarle tanto las supuestas consecuencias. Y esto fue validado por el 12% del electorado de la primera vuelta.

Sánchez, a su pesar, es a la vez el representante de su 12% de primera vuelta y del 49,9% de la segunda. Es el líder del castillismo y del antifujimorismo en general. Y eso es un serio problema para él, y para todos, porque son incompatibles.

La base original de Sánchez, la de

primera vuelta, requiere un énfasis especial: el sistema no los favorece y los margina. Los mata y los silencia. Le quisieron anular el voto y le quitaron a su presidente. En suma, si el sistema no hizo nada por defenderlos, ¿por qué deberían ellos defender al sistema?

Pero un gran sector de los votantes de Sánchez de segunda vuelta demandaba otra cosa. No querían un cambio de sistema, sino defenderlo. Sí, defenderlo: de Keiko Fujimori, que viene desmontando y capturando el sistema democrático para ella misma, y su presidencia sería el capítulo final.

Este tipo de elector de segunda vuelta está más integrado que el de la primera. Es más urbano, más moderado, y su relación con el sistema ha sido mucho más positiva. Por eso lo defiende, porque el sistema lo ha defendido antes, aunque cada vez es menos. Por eso teme perderlo por completo.

El Perú está quebrado, qué duda

cabe. Lo comprobamos en cada segunda vuelta, cuando nos partimos en dos grandes bloques. Pero también estamos quebrados *al interior* de estos bloques. La división entre Lima y el sur andino no se difumina al interior del antifujimorismo, sino que se reproduce de otro modo: entre un elector que busca defender la democracia y otro que la mira como una sofisticación absurda. Entre uno que pedía una corrida hacia el centro y una predictibilidad en las políticas públicas y otro que está harto de esperar y que le digan que sus demandas no son las prioritarias.

Este martes Roberto Sánchez anunció que no reconocerá la victoria de Keiko Fujimori y denunció un “fraude en marcha” en su contra. A mí me parece una movida torpe y suicida, que divide todo lo que consiguió en segunda vuelta sin ninguna prueba palpable. La única denuncia de fraude que toma dieciséis días en anunciarse y sin mostrar ninguna inconsistencia.

Sin embargo, sé que tiene sentido: empata más con su elector de primera vuelta, uno que no aceptará las causas de la derrota (“sacamos 80% en Puno y ¿vamos a perder por un cónsul en París y Nueva Jersey?”), y a la vez es un llamado a que estén activos y movilizados, para no regalarle espacio al fujimorismo.

El problema es que Roberto Sánchez lidera a ambos sectores a la vez. En los últimos días de la segunda vuelta, le habló principalmente al elector más moderado, pero ahora ha empezado a hablarle nuevamente al elector más radical. Y ahora ha quedado enredado consigo mismo.

Ambos liderazgos son incompatibles. La primera vuelta reafirma; la segunda vuelta amplía y convoca. Alguien debe hablarle a ese 12% de la primera vuelta y decirle que no se le ha abandonado, pero alguien debe mantener también la cohesión del amplio bloque construido el 7 de junio y prepararlo para lo que se vendrá. Y aunque lo desee, Roberto Sánchez no puede ser ambas personas a la vez. Es imposible. Si lo intenta, va a terminar rompiendo el bloque y quedándose con su liderazgo de primera vuelta.

Va a tener que decidir cuál de los dos Sánchez quiere ser: si el de primera vuelta o el de segunda. Si no lo decide pronto, sus electores —ahora todos desconfiados por igual— decidirán por él. ■

Candidato de paja



PEDRO CASUSOL

A sí, a solo unos meses de haber dejado el sillón municipal en el más completo abandono, ávido por emprender una de las aventuras más erráticas, delirantes y “fraudistas” de las que tenga memoria, Rafael López Aliaga —alias “Porky”— pretende regresar a la escena del crimen, a pesar de haber sido proclamado senador de la República. Me cuesta decidir si lo que me domina es la indignación o la náusea. Daría risa, si no fuera la representación exacta de la calaña de políticos que nos gobiernan. Impedido de postular a la reelección, el consabido “Porky” ensaya un truco de prestidigitación electoral, demostrando que su ambición presupuestal no conoce de pudor ni de fronteras legales.

El plan es tan transparente como

insultante: colocar a Luis Rubio, actual titular de SISOL, como una suerte de alcalde de paja, un pararrayos tras el cual el empresario católico del cilicio podrá seguir moviendo los hilos del presupuesto municipal a su antojo, disfrazado de teniente alcalde. Es la política del “cambiazó”: Rubio renunciaría o sería vacado, si es que logra asumir el cargo, y de esta forma López Aliaga volvería a lo que considera, vistos los resultados de las elecciones presidenciales, su chakra y su feudo electoral. Ni siquiera se molesta en ocultar el hecho de que planea sacarle la vuelta al artículo 194 de nuestra Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

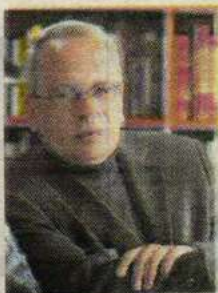
Lo peor es que sí tiene enormes posibilidades de salir elegido, gracias a ese voto limeño conservador, cristiano-católico y profamilia que tiene una fe ciega en lo que yo llamo

“el mito del gerente”. Me refiero a la creencia de que López Aliaga realizó una gran gestión a pesar de la evidencia: la compra de las motos con sobrecosto y sin planificación, los 44 vagones arrumados en el Parque de la Muralla, un monumento al despilfarro que nos viene costando más de 700 mil soles solo en almacenamiento, y el sobreendeudamiento irresponsable de la ciudad por casi 4,000 millones. Por no hablar de obras improvisadas con saldo mortal, como la Vía Expresa Sur, concluida sin estudios técnicos, sin semáforos ni puentes peatonales. Y se supone que fue una “gran gestión”.

El fondo del asunto es que “Porky” se siente envalentonado. No solo es ineptitud técnica u opacidad en el manejo del presupuesto público, López Aliaga representa, en todo su esplendor, la normalización de una manera de hacer política donde el insulto re-

emplaza al argumento y la prepotencia a la gestión. Por eso, no debería de extrañarnos la manera con la que oficializó su postulación en la lista de su propio partido, con la certeza de que las autoridades electorales van a preferir mirar hacia otro lado antes de frenar lo que a todas luces constituye un “fraude a la ley”. La confirmación de que en el Perú de hoy las reglas del juego democrático son plastilina en las manos del poderoso.

A Rafael López Aliaga no le importa Lima en lo más mínimo. Apenas considera la comuna como su trinchera política, su “plan B” tras haber fracasado en su pretensión de alcanzar la presidencia. Entró al Senado, es cierto, pero a “Porky” tampoco le interesa el debate o la confrontación de ideas; en fin, hacer política, comunicar. Apenas si puede articular palabras, ¿se lo imaginan de senador? Claro que no. El Parlamento resulta un escenario demasiado expuesto para su precaria estabilidad mental y sus habituales incoherencias. Él necesita el control directo, la opacidad de los recursos públicos, el manejo discrecional de la caja municipal para satisfacer su inflado ego y seguir destruyendo esta ciudad que, según dijo, sería “potencia mundial”. Parece chiste, pero es anécdota. ■



Ni componendas ni pactos

Los fujimoristas proclaman ahora que serán dialogantes y amplios. Hasta hablan de un gabinete plural y técnico.

Claro, la moderación es un lujo que pueden darse provisionalmente porque lo más arduo del trabajo sucio ya fue hecho por el Congreso que ellos presiden.

Cómo no van a tener maneras suaves si la Junta Nacional de Justicia es un basurero, el Tribunal Constitucional un mingitorio y la Defensoría del Pueblo una conserjería. Cómo no van a simular una voz convocadora cuando las leyes de la impunidad ya fueron dadas y cuando alias Fiscal de la Nación está a su servicio. Cómo no van a tener mirada de gentiles cuando un poder judicial atemorizado ve caer, uno tras otro, a quienes plantearon la resistencia como salida.

La maquinaria pesada del congreso del hampa demolió las casas que le eran ajenas. Ahora viene la arquitecta con cara sonriente a hablarnos del futuro común, la reconciliación y los nuevos tiempos.

Recuerdo 1990, cuando la izquierda de pacotilla que seguíamos teniendo creyó que el chinito era una opción y que había que apoyarlo. Recuerdo al ministro de agricultura y a la ministra de educación jurando como miembros del gabinete de Alberto Fujimori. ¡Cuánta ingenuidad! ¡Cuánta yuca!

Al poco tiempo, Fujimori se deshizo de todo lastre, empezando por la izquierda que había votado por él y siguiendo por el evangelismo que había hecho campaña en calles y plazas, y adoptó el programa del Fondo Monetario Internacional. El *show* se había convertido en *shock*. Después dio el golpe de Estado y le ofreció al Perú la deshonor. Las calles aplaudieron.

Ahora es lo mismo porque la heredera es, moralmente, calco y copia de su padre. Y ahora, otra vez, un ejército de tragalda-

bas, una legión de olfativos oportunistas, una masa de sanchos montados en asnos de todos los pelajes miran qué puerta se entreabre, qué puente colgante se vislumbra, qué sueldo público aparece en alguna partida de emergencia.

El drama del fujimorismo es que no puede conquistar adeptos porque carece de ideales, programa, metas. Lo que hace es reclutar beneficiarios expectáticos y con eso no se hace un partido sino una federación de apetitos. La gente que votó por Fujimori por miedo a la inseguridad ya fue retribuida en el mejor estilo de la mafia: la ley Rospigliosi sobre el fuero militar-policial garantiza que los uniformados que maten en el ejercicio de su labor serán juzgados por el colegaje. A eso le llaman el regreso del orden.

**NOS IMPORTA
UN RÁBANO
QUÉ DECIDAN
LOS LÍDERES
DISPUESTOS A LA
CLAUDICACIÓN**

Ese es el fujimorismo en su esencia: militares con licencia para matar, civiles abocados a favorecer a la riquería donante, legisladores atentos a las demandas de los empresarios que enfrenten algún problema. Y mucha prensa adicta y mermelera que seguirá los pasos de la presidenta y hará de cada viaje a la pobreza (en helicóptero) una gesta digna del rey Midas.

La señora Fujimori tiene que entender que le ha ganado por un puñado de votos (44,000 cuando escribo estas líneas) al peor candidato del menú electoral. Le ha ganado miseramente a alguien que tenía el estigma del antaurismo en la frente y en la cabeza el sombrero de quien había querido ser el Fujimori de la izquierda rampante. Ha vencido con las justas a quien fue acribillado por una vasta campaña de la prensa escrita, la televisión teleprentada y la radio chueca.

La oposición no reside en el Congreso, donde ya se vislumbran canjes precoces, agendas escritas al alimón y táperes con carnecita. Nos importa un rábano qué decidan los líderes dispuestos a la claudicación y los parlamentarios que quieran repetir el papel de los Niños de Acción Popular. La oposición tiene más de nueve millones de domicilios, más de nueve millones de carnés de identidad, más de nueve millones de convicciones ciudadanas.

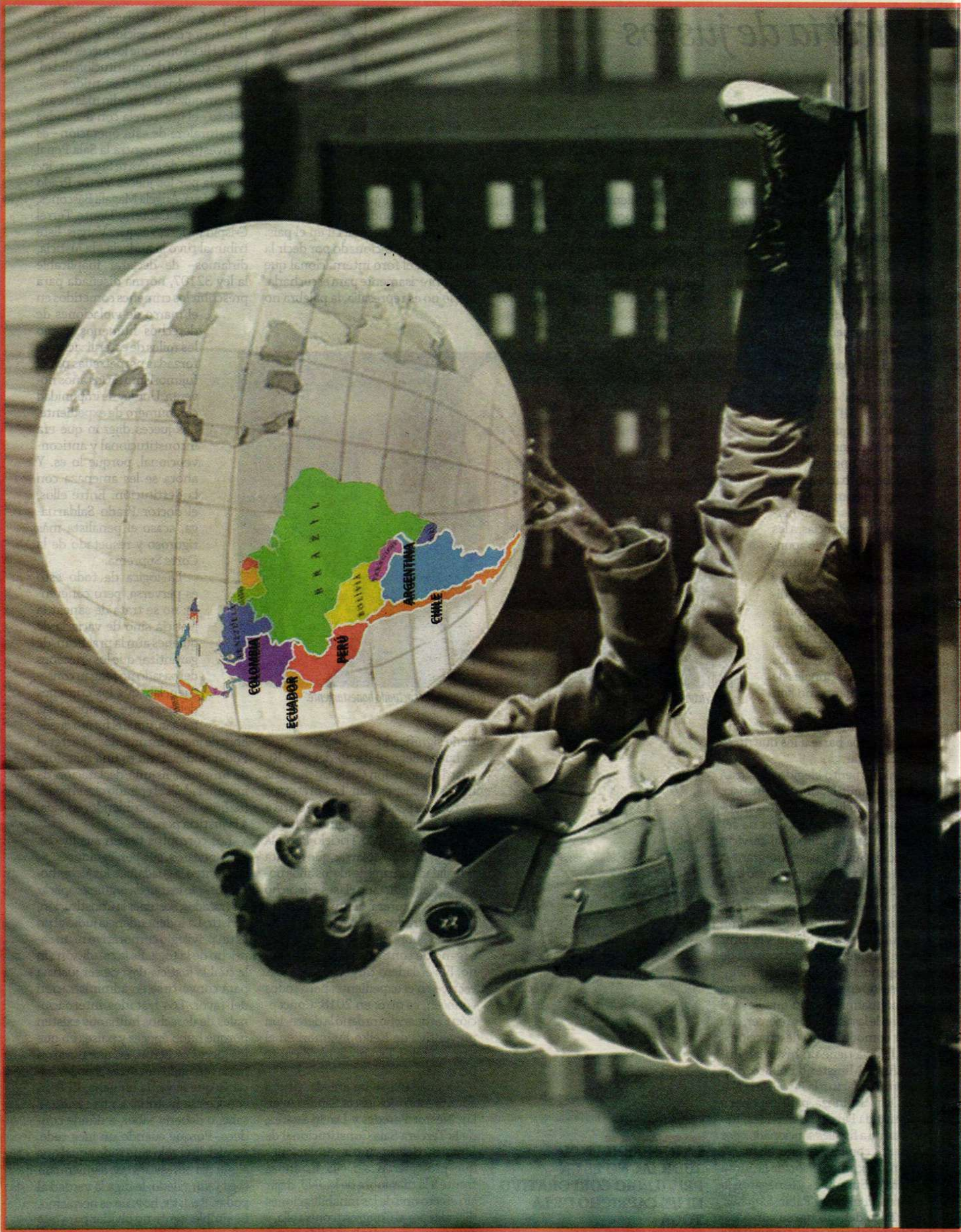
Y esos más de nueve millones de miradas atentas no quieren componendas ni pactos con quienes destruyeron las instituciones en los 90 y reivindican ahora al hombre que produjo tanta devastación.

El Pacto de la Moncloa fue posible cuando Adolfo Suárez desmontó el edificio dictatorial de Francisco Franco, a quien había servido en distintos cargos. Si Suárez no hubiera renegado en los hechos de la dictadura en la que actuó, el parto de la reconciliación española habría sido imposible. La señora Fujimori

—al lado de la senadora Martha Chávez y de otras sombras notorias— no se arrepiente de nada y proclama el buen gobierno de su padre. Es triste y vergonzoso. Es como si María del Carmen Franco Polo, la hija del caudillo, hubiese ganado estrechamente las elecciones en España. Es como si Inés Lucía Pinochet Hiriart estuviese a punto de entrar a La Moneda por mandato popular. Es como la serpiente que se muerde la cola, imagen que también representa al infinito. ■



Carro alegórico montado por docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Arte, del Cusco.



Cacería de justos

Hay un tipo de venganza que no se ejerce en la oscuridad sino a plena luz, con sellos y resoluciones, con el lenguaje aséptico de los expedientes y la solemnidad impostada de quien administra el poder como si fuera un feudo. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el Perú con sus jueces más honrados.

La consigna –“¡Barrer el Poder Judicial!”– la lanzó Fernando Rospigliosi, fujimorista al mando circunstancial del Congreso. Pero la escoba no barre parejo. No toca a los magistrados corruptos, a los que comercian con sus sentencias, a los “cuellos blancos”. Solo apunta a los íntegros: a quienes se atrevieron a aplicar la ley sin mirar a quién perjudicaba, a quienes pusieron la Constitución por encima de la conveniencia partidaria, a quienes entendieron que los tratados internacionales de derechos humanos no son adorno retórico, sino norma vinculante. En otras palabras: la escoba barre a los que no se dejan comprar.

El instrumento elegido para esta faena es la Junta Nacional de Justicia, convertida en lo que ninguna institución de su naturaleza debería ser jamás: un ariete político al servicio del poder. Sus actuales integrantes fueron designados en un proceso irregular, bajo la batuta del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, hombre colocado en ese cargo por el fujimorismo para satisfacer a su aliado Vladimir Cerrón. La que debía ser centinela de la independencia judicial se ha metamorfoseado en su cazador más encarnizado: una institución que lleva el nombre de la justicia para ejercer, con mayor comodidad, su destrucción.

La JNJ ya tiene un historial. Primero fue el Ministerio Público: destituyeron de facto a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para imponer a la destituida Patricia Benavides. Rehabilitaron a fiscales sancionados por sus nexos con los “cuellos blancos”, alteraron la composición de la Junta de Fiscales Supremos y le negaron la ratificación al fiscal Pablo Sánchez, cuyo único defecto fue su conocido institucionalismo. La captura fue

metódica. Silenciosa. Exitosa.

Ahora el foco está sobre los jueces.

El juez superior Oswaldo Ordóñez fue el primer gran sacrificado: perdió su condición de magistrado por haber expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

en representación de una asociación de jueces, las condiciones que minan la independencia judicial en el país. Es decir: fue sancionado por decir la verdad en el foro internacional que existe precisamente para escucharla. Si eso no es represalia, la palabra no



RONALD GAMARRA



Juez Víctor Prado Saldarriaga: amenazado con la destitución por haber actuado honestamente.

tiene significado.

Luego llegó el turno del juez Richard Concepción Carhuanchu: seis meses de suspensión. Los pretextos son de una pequeñez que sonrojara a cualquier jurista con dignidad: haber cantado en público Triciclo Perú, la canción de Los Mojarras que retrata la realidad peruana desde los años noventa; haber dictado clases –derecho que la ley expresamente reconoce a los magistrados–; haber emitido una opinión sobre un caso que el propio órgano de control ya había archivado. El verdadero cargo, el que nadie escribe en el expediente, pero todos conocen, es otro: en 2018, Concepción Carhuanchu ordenó la detención preventiva de Keiko Fujimori en el caso cocteles. Eso no se olvida ni se perdona.

La guadaña sigue afilada. Ahora apunta contra los jueces Sandro Aguilar, Néstor Paredes y David Suárez, de la Tercera Sala Constitucional de Lima. Su delito: emitir resoluciones que protegieron a Delia Espinoza frente a la maniobra de la JNJ, dejar sin efecto una de las inhabilitaciones dictadas por el Congreso contra ella, y antes aún, conceder la medida caute-

lar que frenó la destitución exprés de la anterior composición de la propia JNJ. Hicieron lo que los jueces deben hacer: control de constitucionalidad. Por eso podrían ser destituidos.

Pero quizás el episodio más escandaloso –el que revela con desnudez la naturaleza de esta operación– es la investigación contra la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, integrada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Ángela Magalli Bascónes, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín y María Vásquez Vargas. Este tribunal tuvo la audacia –la justicia, diríamos– de declarar inaplicable la ley 32107, norma diseñada para prescribir los crímenes cometidos en

el marco de violaciones de derechos humanos, como los miles de esterilizaciones forzadas perpetradas por el fujimorismo en los años noventa. Una ley de impunidad con número de expediente. Los jueces dijeron que era inconstitucional y anticonvencional, porque lo es. Y ahora se les amenaza con la destitución. Entre ellos, el doctor Prado Saldarriaga, acaso el penalista más riguroso y respetado de la Corte Suprema.

La lógica de todo esto es perversa, pero coherente: no se trata de sanear la justicia sino de vaciarla de quienes aún la practican, de garantizar que los crímenes del pasado no tengan consecuencias, que los crímenes del presente tampoco las tengan, y que el futuro quede

libre de jueces incómodos. “Barrer el Poder Judicial” no es una metáfora de limpieza. Es una declaración de impunidad. Es el epitafio que el poder mafioso le está escribiendo, en vida, a la justicia peruana.

Los corruptos tienen sus jueces. Los honestos, sus perseguidores.

Frente a la guadaña, a los jueces honestos solo les queda erguirse: aplicar los tratados, sostener la Constitución, resistir. La independencia judicial no es un privilegio corporativo ni un capricho de la toga. Es la condición sin la cual la justicia deja de ser justicia para convertirse en administración del favor. Los tratados internacionales de derechos humanos existen porque hubo épocas y países en que los jueces cedieron, en que miraron hacia otro lado mientras el poder hacía lo que le venía en gana. El Perú conoce esa historia. La ha vivido. Y sabe, o debería saber, a dónde conduce. Porque cuando un juez cede, no pierde él solo sino todo aquel que algún día necesitará que alguien, con toga y sin miedo, le diga la verdad al poder. Resistir, hoy, no es heroísmo. Es simplemente no olvidar para qué existe un juez. ■

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NO ES UN PRIVILEGIO CORPORATIVO NI UN CAPRICHIO DE LA TOGA

Luego de la independencia, un mordaz contemporáneo de Bolívar. José Joaquín de Larrija, inmortalizó su decepción con la misma mediante esta décima en la que lo desaira tanto como a Fernando VII:

*Cuando de España las trabas
en Ayacucho rompimos,
otra cosa más no hicimos
que cambiar mocos por babas.
Nuestras provincias esclavas,
quedaron de otra nación.
Mudamos de condición,
pero solo fue pasando
del poder de Don Fernando
al poder de Don Simón.*

De ser cierta aquella premisa de que no hay historia propiamente sino solo biografía, como sostuvo Thomas Carlyle, tendríamos que concluir que fue fundamentalmente Washington quien hizo grande y gravitante a los Estados Unidos y Bolívar pequeña y superflua a la colectividad andina. Alternativamente, si argumentáramos que existen fuerzas impersonales contra las que nada puede hacerse para influenciar la historia porque tales fuerzas guían incluso a quienes aparentan dirigirlos, no habría más remedio que conformarnos con nuestra

Origen del progreso



**RAFAEL
BELAUNDE AUBRY**

consuetudinaria medianía. Existe, por fortuna, otra opción: la que postula que el progreso y la prosperidad son el resultado de múltiples acciones e iniciativas individuales y de circunstancias diversas pero que, de puro sumisa y cortesana, la historia las soslaya en su afán por privilegiar fachadas antes que cimientos.

En realidad, una conjunción de factores, incluida la geografía, determinan la historia. Todos aportan su cuota pero, en mi opinión, cuando las autoridades interfieren con la creatividad emprendedora, lo hacen por celo y terminan torciéndola.

Los reyes con su suntuosidad, los conquistadores con su avidez desenfrenada y los guerreros con sus afanes destructivos llenan los libros de historia, pero de historia muchas veces infecunda. En cambio, nada de huerro hay en Galileo, Newton y Mendelé-

yev; o en los ilustrados Locke, Turgot y Smith; o en los innovadores Jefferson y Lincoln. Ellos sí influenciaron nuestro devenir para bien. Al dotarnos de herramientas intelectuales para la procura del bienestar, desbrozaron el camino y promovieron el entorno propicio para la difusión de la libertad y para la búsqueda del conocimiento y de la prosperidad.

Johan Norberg lo explica diáfana-mente en su libro "Progreso": gracias a Alexander Fleming, que descubrió la penicilina, se logró derrotar una serie de enfermedades infecciosas y extender la vida de millones. Fritz Haber y Carl Bosch, por su parte, hicieron posible devolverle fertilidad al suelo exhausto al lograr la síntesis del amoníaco y la producción de fertilizantes sintéticos. Que Haber se vinculara luego al desarrollo de armas químicas no invalida su aporte primigenio. Norman Borlaug,

con su Revolución Verde, hizo posible la mejora intrínseca de los cultivos, y Steve Jobs y Bill Gates revolucionaron la informática. Estos grandes hombres descubrieron las recetas para trocar el dolor en alivio, la escasez en abundancia y la ignorancia en conocimiento. Lo hicieron, sin apelar a títulos nobiliarios, espadas o cortesanos y aligeraron nuestras penurias regalándonos una calidad de vida otrora insospechada. Demás está decir que sus emprendimientos se dieron con total autonomía del tutelaje del Estado.

Norberg sintetiza su mensaje con una cita de Jane Jacobs: "La pobreza no tiene causas, la prosperidad sí las tiene". Jacobs apeló a la metáfora del frío, que es el estado natural, salvo que procesos específicos generen calor para contrarrestarlo.

Es, pues, la iniciativa individual la principal responsable del progreso. Pero hoy, lo mismo que ayer, los retrógrados se obstinan en coartarla para perpetuar sus feudos. Unos, acaparando para sí lo comunitario. Otros, despojando y dilapidando lo ajeno. Ambos extremos socavan la libertad, la difusión de la prosperidad y la independencia. Por eso, para salir adelante y sortear los obstáculos con los que esos lastres le escatiman el progreso al emergente, este debe ser rebelde, tenaz e intransigente. ■

Nuevas investigaciones periodísticas le han puesto rostro al lado más perverso de la industria de la inteligencia artificial. Y no se trata de las preocupaciones sobre la relación de los *software* y las armas, la vigilancia civil, el suicidio de personas alentadas por *chatbots* o la validación que da la IA a usuarios con ideas extremistas. Tampoco se trata del impacto ambiental generado por el excesivo uso de electricidad y agua para hacer funcionar los ordenadores que analizan billones de datos, sino del uso de seres humanos como verificadores de contenidos dañinos.

Esta sigue siendo una práctica usual para varias compañías que buscan impedir que sus programas de inteligencia artificial generativa (IA-Gen) solo aprendan de internet y las redes sociales y generen un producto ambivalente e imperfecto. En pocas palabras, el filtro humano es fundamental para evitar que los modelos de IA sean estúpidos y peligrosos.

Pero ¿dónde encontrar a personas que se expongan a contenidos violentos y degradantes sin generar mayor controversia moral y laboral? Como siempre: África.

Medios como la "BBC", "Wall Street Journal" y "The Guardian" ya

Filtros humanos



YBRAHIM LUNA

habían alertado sobre esta práctica, exponiendo el caso del keniano Mophat Okinyi, de 27 años.

Mophat fue contratado por la empresa Sama, subcontratada por la gigante OpenAI para entrenar y mejorar su modelo ChatGPT. Mophat se desempeñó, junto a otros 50 trabajadores, como 'moderador de contenido' en Nairobi entre 2021 y 2022. Su trabajo inicial consistió en revisar cientos de textos con descripciones explícitas de violencia sexual. Luego tuvo que revisar imágenes con escenas de violencia, asesinato, suicidios, necrofilia, zoofilia, automutilación, abuso infantil y más, para etiquetarlas como "negativo" y que ChatGPT las evitara en su interacción con los usuarios.

El salario de Mophat era de entre 1,40 y 3,70 dólares la hora según las tareas. Sin embargo, nada lo preparó para el daño psicológico que él y

sus compañeros padecieron debido a la exposición diaria. La ansiedad y la paranoia lo alejaron de su familia. Su esposa estaba embarazada.

Mophat aseguró que no fue advertido del contenido perturbador al que sería expuesto. En 2023 denunció públicamente la explotación humana detrás de las IA y fundó una *oenegé* que hoy vela por los derechos de los trabajadores en empresas similares. En 2024 la revista "Time" lo reconoció como una de las personas más influyentes en el mundo de la IA.

Pero el tema, con el tiempo y el *lobby* corporativo-digital, pasó prácticamente desapercibido para la mayoría. El público no habla de eso cuando compra y descarga una nueva aplicación.

Hace dos semanas, la cadena alemana Deutsche Welle emitió un documental sobre esta problemática oculta. En "El lado oscuro de la IA:

explotación del ser humano y la naturaleza", se aborda el caso de varios verificadores de contenido kenianos que firmaron un convenio de confidencialidad para mantenerse aislados y trabajar entre 45 y 60 horas semanales. Durante la fase de capacitación —cuentan los entrevistados— los trabajos eran sencillos, como identificar imágenes de gatos, pero ya en el trabajo real las cosas se volvieron turbias, como identificar cientos de imágenes de cadáveres.

Los trabajadores, que por seguridad ocultaron su identidad, contaron a "DW" que mucho del contenido que les enviaba OpenAI y Sama provenía de la Deep Web o la Dark Web. Lo más chocante fue examinar videos donde se cometían abusos sexuales a niños. Algunos de los 'moderadores' kenianos, que podían ganar hasta 9 dólares diarios, eran padres y terminaron desarrollando depresión y estrés postraumático grave.

Estos trabajos no solo se realizan en África: las compañías tienen canteras de cientos de 'moderadores de contenido' en India, Bulgaria, Argentina, Venezuela, Siria y Líbano. Sin embargo, los países africanos son los más atractivos por sus casi nulos controles laborales.

Las mentes humanas perturbadas parecen ser un daño colateral del progreso. ■

Negociando con psicópatas



DANIEL ESPINOSA

Los iraníes dicen que las negociaciones con EE. UU. vienen mejorando desde que reclutaron a psicólogos capaces de interpretar el errático accionar de Donald Trump. De manera anónima, un oficial iraní le dijo esto al medio independiente Drop Site News (15/06): "Hemos incorporado a dos psicólogos expertos al equipo que asesora las negociaciones para poder adaptar los mensajes dirigidos al presidente Trump, con la perspectiva de gestionar lo que consideramos un patrón de comportamiento psicopático".

Dieron en el clavo. Desgraciadamente, el comportamiento psicopático del hombre más poderoso del mundo no solo volvió a aflorar el fin de semana pasado, sino que lo hizo precisamente cuando J. D. Vance, su vicepresidente, estaba a punto de encontrarse con una delegación iraní para negociar la paz entre sus naciones. Las conversaciones, que estuvieron a punto de cancelarse debido al exabrupto de Trump, se llevaron a cabo en Suiza.

Desde Washington, el republicano escribió en redes sociales que si los iraníes cerraban el estrecho de Ormuz se quedarían sin país. Remató amenazando directamente a la delegación iraní que voló a Suiza, asegurando que no volvería a salvo a su país si desobedecía. Lo cierto es que Trump ya tiene meses buscando una forma "honorable" de salirse de esta guerra que él mismo inició y que amenaza con condenar a buena parte del planeta a una recesión económica catastrófica, una nueva Depresión que el narcisista en jefe no desea ver asociada a su "legado" (Trump está convencido de que la historia lo recordará positivamente, colocándolo al lado de figuras como Winston Churchill o Franklin Roosevelt).

El gran obstáculo para firmar la paz es Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel –el otro psicópata–, a quien cualquier perspectiva de paz le resulta aborrecible. Netanyahu convenció a Trump de que la guerra contra Irán

acabaría en cuestión de horas, luego de un bombardeo "quirúrgico" que eliminaría al líder supremo iraní. La decapitación del régimen de los ayatolas ocurrió, pero de inmediato surgió otra cabeza para reemplazar a la anterior. El mentecato que dirige Occidente siguió el consejo del israelí a pesar de que Dan Caine, jefe del Comando Conjunto del

Ejército estadounidense, le advirtió que nada bueno resultaría de esta aventura.

Al final se cumplió lo pronosticado por analistas internacionales que la gran prensa prefiere evitar: el régimen iraní terminó fortalecido, Israel y Estados Unidos no consiguieron ni uno solo de sus objetivos, y el balance de poder en la región sufrió una reconfiguración



Donald Trump: la delegación iraní ha incorporado a dos psicólogos para intentar descifrarlo.

nada ventajosa para los intereses de los agresores. Ahora Irán está por conseguir concesiones inauditas a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz, que estaba abierto antes de que EE. UU. e Israel atacaran.

Algunos analistas afirman que la relación entre Trump y Netanyahu se estaría agriando y que un supuesto cisma entre las políticas exteriores de sus respectivos regímenes se estaría ensanchando, todo a causa de la intransigencia del israelí. Dicen que pronto podríamos ver el final de la "relación especial" que EE. UU. e Israel vienen cultivando desde hace ocho décadas.

Esta perspectiva se basa, en buena parte, en declaraciones que Trump suelta de vez en cuando. El pasado primero de junio, solo por citar el ejemplo más reciente, el inquilino de la Casa Blanca le lanzó esto a Netanyahu (requisitorado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y con procesos criminales abiertos en su propio país):

"¡Estás loco! Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Todo el mundo te odia. Todo el mundo odia Israel por tu culpa".

No es la primera vez que sucede. En 2020, en un ejemplo menos reciente, Netanyahu felicitó a Joe Biden por ganar las elecciones presidenciales yanquis. Furioso, Trump chilló que "nadie había hecho más por 'Bibi' (que él)", terminando el mensaje con un altisonante "...fuck him" (que no vemos necesario traducir).

El asunto de fondo es que, más allá de la retórica, es poco lo que cambia en términos concretos: Estados Unidos sigue apoyando a Israel en su genocidio, invasiones militares y limpiezas étnicas, proveyendo las armas, el dinero y la protección diplomática. Lejos de cualquier potencial cisma, el Congreso estadounidense está trabajando ahora mismo en un proyecto de ley que fusionaría efectivamente sus fuerzas armadas y su complejo industrial-militar con los de Israel.

Los escépticos –esos admirables aguafiestas– no están cayendo en la farsa. El último capítulo del "Show de Bibi y Donald" no debería ser tomado como la señal inequívoca de un quiebre histórico entre sus países, sobre todo cuando, en el pasado, los reclamos y ataques de Trump a Netanyahu no se han traducido en cambios sustanciales en la política exterior estadounidense de cara a Israel y sus intereses regionales. En cuanto a Irán y una potencial tregua, debemos subrayar lo obvio: Netanyahu se niega a abandonar el sur de Líbano o dejar de hacerle la guerra a Hezbolá, condiciones exigidas por los persas para firmar la paz.

El economista y analista internacional Jeffrey Sachs –voz de la cordura en la era Trump– dijo en una reciente entrevista que todo ese lenguaje psicopático ya referido, que se ha convertido en un hecho cotidiano gracias a Trump, Netanyahu y sus secuaces –gente como el fascista Itamar Ben Gvir, ministro israelí–, no debe por ningún motivo ser normalizado, particularmente cuando se está llevando a cabo un genocidio.

Sachs observó que, hace no mucho, un tipo como Ben Gvir (quien recientemente dijo que "todo Líbano debía arder") habría formado parte del partido nazi, añadiendo que debería estar bajo examinación psicológica. Otra cosa que los herederos de Freud harían bien en examinar es el hecho de que tantos psicópatas, sociópatas y narcisistas estén siendo elegidos en las urnas, de manera libre y democrática. ■

AHORA IRÁN ESTÁ POR CONSEGUIR CONCESIONES INAUDITAS

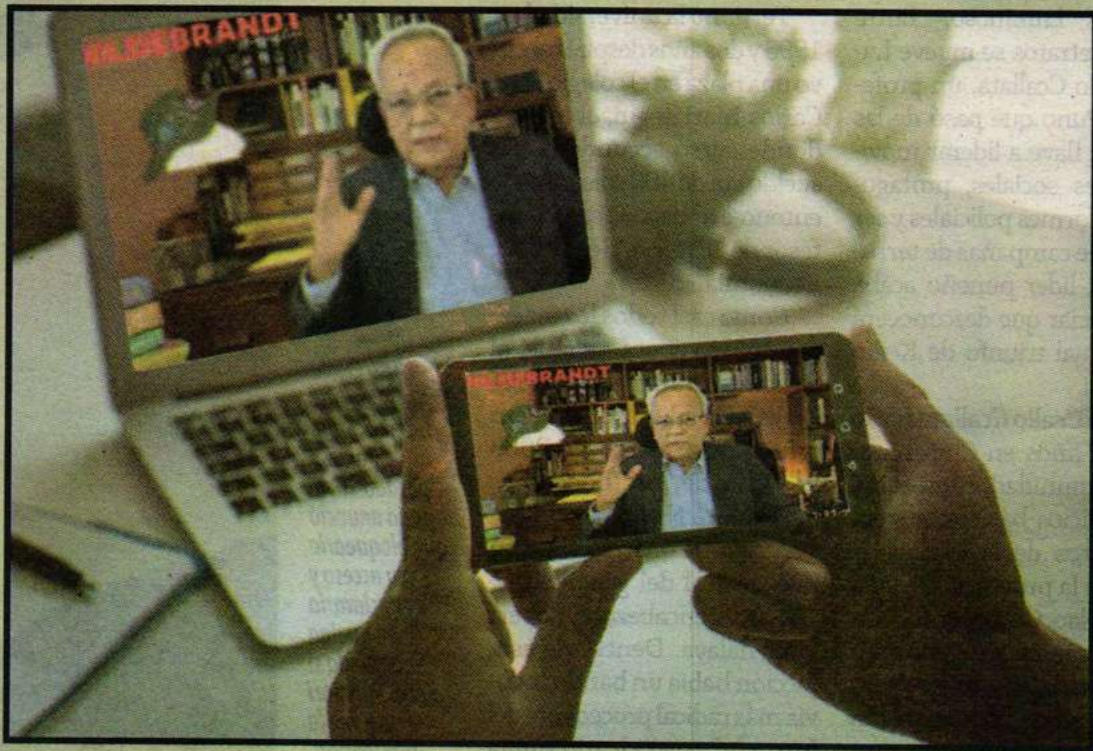
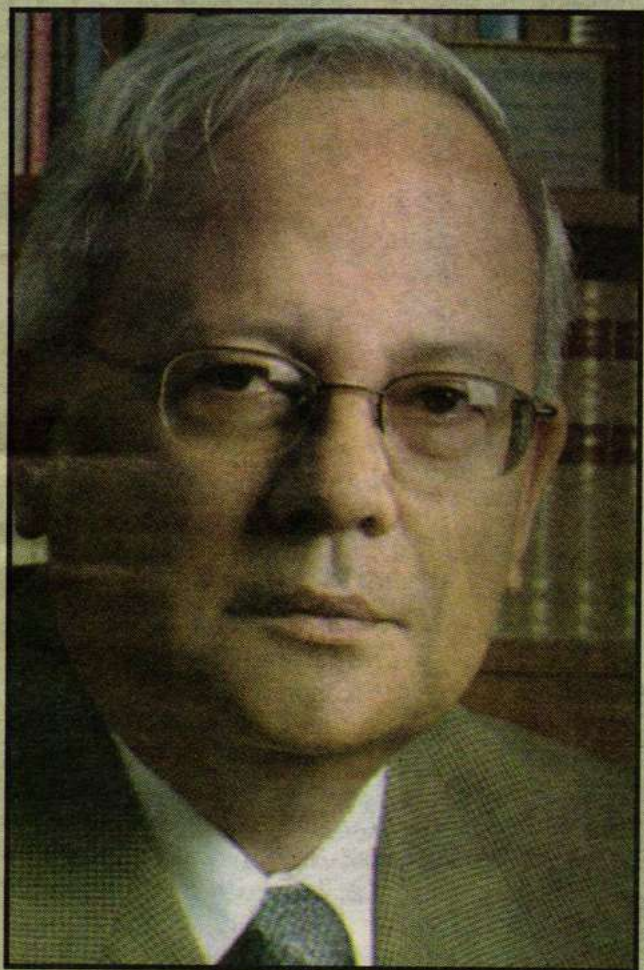
HILDEBRANDT

en sus trece

¡CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Todos los lunes, antes de las 9 DE LA NOCHE, siga en vivo el Podcast de César Hildebrandt

Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial



Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los

281,541 suscriptores y
ha sumado **51'014,569** vistas

Retrato de un radical

► El dirigente puneño Lucio Ccallo Ccallata se forjó en el CONARE, vecino del MOVAREF. Recuerda hasta hoy el desprecio de un gamonal en contra de su familia

BRUNO AMORETTI

Para unos es un dirigente popular que pone voz a las demandas históricas del sur andino. Para otros es heredero político de Sendero Luminoso. Entre ambos retratos se mueve Lucio Ccallo Ccallata, un profesor de Puno que pasó de las aulas de Ilave a liderar movilizaciones sociales, protagonizar informes policiales y ser blanco de campañas de terruqueo. El líder puneño acaba de anunciar que desconocerá el eventual triunfo de Keiko Fujimori.

Lucio Ccallo Ccallata nació hace 53 años en Chijichaya, una comunidad campesina sin servicios básicos, a siete kilómetros de la ciudad de Ilave, en la provincia puneña de El Collao. Creció junto a sus tres hermanos en una familia dedicada a la agricultura y al comercio. Comercian principalmente chuño, producto que luego vendían en Arequipa y en la frontera con Bolivia. Hasta cumplir los 12 años Ccallo y sus dos hermanos ayudaron a sus padres en las tareas del campo. Su infancia —dice él— lo marcó.

“Fuimos objeto de abusos y del desprecio de un gamonal cercano a nuestra comunidad. Aquello generó en mí una conciencia de por qué somos tan menospreciados. Eso fue forjando mi personalidad”, cuenta.

Cumplidos los 12, se mudó a Ilave a estudiar secundaria en el colegio nacional José Carlos Mariátegui. Dice que

allí descubrió su vocación docente.

En 1990, con 18 años, comenzó la carrera de Educación en la Universidad Nacional del Altiplano. Quienes compartieron esa etapa con él aseguran que no tuvo una participación política destacada.

Terminó la universidad en 1996 y dos años después obtuvo una plaza en el colegio José Carlos Mariátegui, el mismo donde cursó secundaria. Su sueldo era de 400 soles. Desde entonces trabaja allí como profesor de Historia, Geografía y Economía.

Como casi todos los maestros en esa época, se afilió al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep). En marzo de 2003 fue uno de los fundadores del Comité Nacional de Reorientación (Conare), la facción más radical del gremio, que entonces encabezaba Robert Huaynalaya. Dentro de esta facción había un bando todavía más radical procedente del Movaref, cuyo ideario aludía al “pensamiento Gonzalo” y cuyo programa abogaba por la libertad de los cabecillas senderistas.

Ccallo sostiene que se afilió al Conare porque la dirigencia nacional del Sutep, controlada por Patria Roja, se opuso a la huelga magisterial de 2003, cuya principal demanda era el aumento salarial. “Yo era un docente joven que veía cómo comenzaban a terruquear y satanizar a quienes reclamaban sus derechos. Me sumé al movimiento más democrático y consecuente al interior del sindicato”, dice.

Con los años, Ccallo fue ga-

Lucio Ccallo frente al puente internacional de Ilave. El pasado 10 de junio anunció que bloquearía su acceso y se declararía en huelga indefinida si Keiko Fujimori asume la presidencia.



nando influencia dentro del Conare. En 2006 fue elegido secretario regional por Puno. Tres años después, durante la administración aprista, la organización hizo una purga y expulsó a varios dirigentes, entre ellos a Huaynalaya, al que tacharon de revisionista.

En 2011 estampó su firma en los planillones de adheren-

tes para la inscripción del Movaref como partido político. Lucio Ccallo sí reconoce tanto su firma y adhesión al brazo político de Sendero. Argumenta que su principal motivación fue la propuesta de una nueva Constitución.

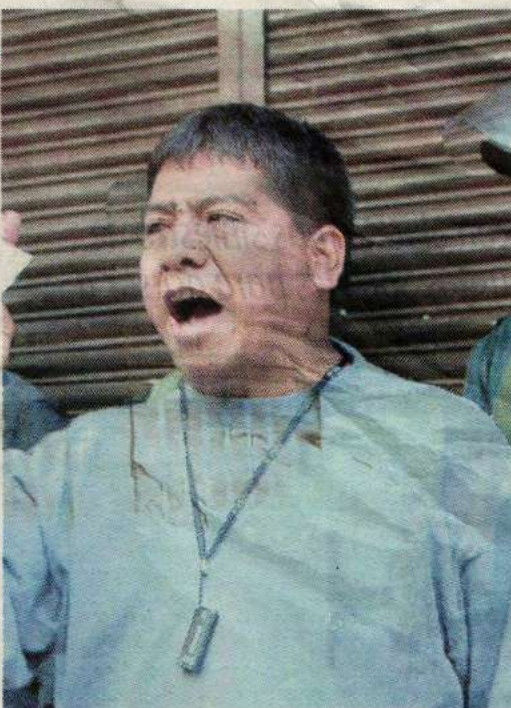
“Todos los grupos políticos que plantean una nueva Constitución hemos tenido que es-

tampar las firmas, apoyarlos, porque es la única vía —considero— de que puedan mejorar en nuestra patria lo que es la democracia, la economía y la educación”, afirma Ccallo.

“Era lo que más me interesaba. Como nosotros provenimos de un pueblo aimara, queríamos que todos los pueblos originarios sean incluidos,



Maruja Inquilla, dirigente social: "Buscan sus intereses personales, se adelantan sin consultar a las bases. No son representantes del pueblo, de los docentes tal vez. Si te alejas de sus posturas, te tildan de vendido".



César Tito Rojas, virtual diputado de Juntos por el Perú y compañero de Lucio Ccallo en el Conare y la Fenate: "Lucio es un compañero consecuente. No se ha dejado quebrar por nadie".



Liubomir Fernández, periodista puneño: "Existe el concepto de que Lima no quiere a Puno. Cuando Boluarte dijo que Puno no es el Perú, recrudecieron las protestas. Cuanto más ataquen a gente como Lucio Ccallo, más se van a solidarizar con él".



Lorenzo Ruiz, miembro del colectivo Bloque Lima Popular: "La Asamblea Constituyente y la democracia participativa son sus ideas fundamentales. Diría que es bastante dialogante e institucionalista".

del Interior. Para contrastar la información, le consultamos a Ccallo dos días después de la entrevista.

"No sé por qué yo debo hablar sobre mi situación personal, eso no contribuye a la lucha del pueblo...", dijo en un primer momento. Cuando insistimos, para saber si el documento no es apócrifo, responde: "Como he firmado varios documentos, ha podido ser, sí (...). Yo no he tenido cargos. No tengo por qué ventilar mi vida personal, también yo he cometido un error ahí".

Al año siguiente, en enero de 2012, suscribió una proclama de respaldo al Movadef después de que el Jurado Nacional de Elecciones recha-

zara su inscripción. ¿Y en la actualidad?

-¿Qué opina sobre el "pensamiento Gonzalo"?", preguntamos.

-Mira, nosotros respetamos a todos los... Yo creo que no seríamos democráticos si condenamos a unos u otros, ¿no? Respetamos todas las opiniones que ha habido en el pasado y que hoy también se expresan.

Cuando se le pregunta con qué corriente de izquierda se identifica, responde que pertenece a la "izquierda verdadera y no traficante como algunos oportunistas". Dice admirar a Mariátegui, José María Arguedas y a líderes indígenas como Túpac Amaru, Bartolina Sisa, Pedro Vil-

capaza y Carlos Condorena.

El Conare sobrevivió algunos años más. Entre 2011 y 2015 fue dirigido por varios fundadores y militantes del Movadef, entre ellos Juan Garro, Oswaldo Esquivel, Efraín Condori y César Tito. En su última etapa, entre 2015 y 2017, la conducción quedó en manos de Lucio Ccallo pero, igual que en tiempos de Robert Huaynalaya, había sido picado por el repetitivo virus del divisionismo.

En junio de 2017 el Conare vivía una guerra interna. Así que cuando estalla la huelga magisterial, pusieron al frente a Pedro Castillo, un maestro de Cajamarca sin trayectoria en el liderazgo sindical que satisfacía a todas las faccio-

nes. "Creyeron que Castillo era manipulable y por eso le encargan conducir esa huelga magisterial", dice Jaime Antezana, especialista en temas de seguridad. Aquella huelga puso en jaque al gobierno de Kuczynski y paralizó las escuelas del país durante 75 días. Y, sobre todo, consagró al maestro de Chota al frente del magisterio.

Después de aquel episodio la organización adoptó el nombre de Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenateperú), con Castillo como líder indiscutible.

"En esta campaña electoral, sin embargo, la Asociación de Familiares de Procesados y Perseguidos Políticos, expresión de lo poco que queda de Sendero, ha llamado a votar viciado. No le perdonan a Castillo el enterramiento clandestino de su líder durante su gobierno. Es así que Ccallo y otros dirigentes vinculados en el pasado con el Movadef terminaron arrojados por el castillismo. Cambiaron su discurso y hoy en efecto son una base social radical, pero ya no senderista", dice Antezana.

Tras la caída del gobierno de Pedro Castillo, Lucio Ccallo encabezó movilizaciones en Puno y Lima durante el 2023. Entre ellas estuvieron las protestas conocidas como las "Tomas de Lima". En julio de ese año se fundó el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), que reunió bajo su coordinación a organizaciones como la CGTP y la Asamblea Nacional de los Pueblos.

Ccallo despierta adhesiones y rechazo por igual. Tanto en Lima como en Puno hay quienes lo consideran un dirigente social comprometido y quienes lo describen como un oportunista sectario.

"Lucio es un compañero consecuente, identificado no solamente con la zona sur de la región Puno sino a nivel de todo el país, me atrevo a decir. No se ha dejado quebrar por nadie", dice César Tito Rojas, virtual diputado de Juntos por el Perú y compañero de Lucio Ccallo en el Conare y la Fenate. "¿A quién hemos matado? ¿Qué actos terroristas hemos cometido? ¿Dónde está el terror que han causado estos dirigentes?", pregunta.

"La Asamblea Constituyente y la democracia participati-

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

no sólo como 'comunidad campesina' como dicen los fujimoristas. Queremos ser parte del Estado peruano y no como pueblos rezagados o como minorías", agrega.

En el 2012 fue elegido secretario general de la base del Movadef en El Collao, según un documento consignado en un expediente del Ministerio

Procura ser facho

► Un funcionario público se asocia con el lado más siniestro de la División de Investigaciones de Asuntos Sociales para acusar a periodistas, activistas y políticos opositores



Moisés Vega de la Cruz, procurador de Orden Público y denunciante recurrente de manifestantes. Antes perseguía al terrorismo; hoy, a quienes opinan en Facebook contra el fujimorismo.

ALONSO ZAMBRANO

Empezó la caza de brujas. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público y la División de Investigación de Asuntos Sociales

(DIVIAS) de la Policía utilizan las redes de los fujitrolls y los pasquines virtuales para empapelar a periodistas, activistas y políticos opositores. A la cabeza de la neoinquisición se encuentra el procurador Moisés Vega. En la lista de víctimas están, entre otros, la periodista Claudia Cisne-

ros, el exministro Hernando Cevallos, el comunicador Pavel Yábar y la activista Andrea Valderrama.

Andrea Lía Valderrama Campos (40) nunca imaginó que publicar tres frases en su cuenta de Facebook la convertiría en una amenaza para la seguridad nacional.

Rimac, 16 de junio del 2026.

OFICIO N° 167-2026 - DIRINC-PNP/DIRINCRI-DIVIAS-OFAD

SEÑOR : Luis Alberto CASASVERDE REYNA
Procurador Público Adjunto de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público

ASUNTO : Comunica conductas de azuzamiento o incitación a la población, en el marco de la segunda vuelta de "Las Elecciones Presidenciales 2026"

REF. : Disposiciones Vigentes

Tengo el honor de dirigirme a Ud., haciendo de su conocimiento que personal policial perteneciente a la División de Inteligencia Contra el Crimen Organizado-DIRINCRI, en cumplimiento de las disposiciones emanadas del Comando Institucional y dentro del marco de su misión constitucional, de prevenir, combatir e investigar la delincuencia, ha realizado acciones de búsqueda de información, dentro del espectro de las diversas redes sociales, con la finalidad de advertir acciones de azuzamiento o incitación a la población, en el contexto de la segunda vuelta de "Las Elecciones Presidenciales 2026".

Sobre el particular, ante la próxima difusión de los resultados de las Elecciones Generales en segunda vuelta, considerándose el actual escenario de alta polarización política y social existente en diversos sectores del país, resulta necesario que la Policía Nacional del Perú fortalezca sus capacidades operativas y de respuesta inmediata, a fin de afrontar eventuales situaciones de conflictividad social que puedan alterar el orden público y comprometer la preservación del orden interno.

Siendo el caso que, como resultado de un procedimiento de patrullaje virtual, desarrollado por personal policial de la DIVIC-DIRINCRI, se obtuvieron los siguientes resultados, relacionados a la presunta incitación, azuzamiento o instigación a la comisión del delito de disturbios (Art.315 CPP):

1. En la plataforma de videos en línea, denominada YouTube, se ha publicado un video a las 09:00 am del día 09JUN2026, rotulado en la parte superior derecha del dispositivo como "NI BLANCO NI VICIADO-SRA. K NUNCA MAS" y con la descripción "Por qué ahora los fujimoristas dicen que Keiko ganará y que se cocina", con una duración de (09) nueve minutos y (13) segundos, siendo la autora del citado video la periodista de nacionalidad Peruana, Claudia Consuelo CISNEROS MENDEZ (56), quien reside en la ciudad de Miami, Estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, se observó que en el referido video la comunicadora expuso la siguiente frase "Sepan bien, que si está el

El informe de "patrullaje virtual" de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía (DIVIAS), firmado el 16 de junio. Fue el principal insumo de la Procuraduría de Orden Público para denunciar a periodistas, activistas y políticos opositores.

Fujimorismo nuevamente cocinando un intento de fraude, LAS CALLES ARDERAN, pues el voto del pueblo se hará respetar y no el de una mafia y de sus aliados, así que advertidos están, no se jueguen con la voluntad popular, no se jueguen con el voto del pueblo, no hagan trampa, porque nosotros la desharemos, la misma que se desarrolló desde el minuto 8.41" hasta el minuto 9.13", momento en que termina el video.

2. Asimismo, César Hugo TITO ROJAS, virtual diputado por Puno de Juntos por el Perú, registra trayectoria como dirigente sindical y social vinculado a FENATE y organizaciones populares puneñas. Medios de prensa lo relacionan con antecedentes de cercanía al MOVAREF, extremo que él ha negado públicamente. En el contexto postelectoral 2026, la prensa lo identifica como el actor que habría convocado abiertamente a la toma de vías públicas en Puno, posicionándolo como articulador regional de movilizaciones en respaldo a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.
3. Por otro lado, LUCIO CCALLO CCALLATA, dirigente sindical y social puneño vinculado por medios a FENATEP/CONARE, CNUL y presuntos nexos con MOVAREF, ha reaparecido en el contexto postelectoral 2026 convocando movilizaciones en Puno. La prensa televisiva (canal 5), reporta que anunció una huelga indefinida, advirtió el bloqueo del puente internacional de ILAVE y llamó a marchar hacia Lima ante una eventual victoria de Fuerza Popular, por lo que representa un actor regional con capacidad de articulación y movilización social.
4. De igual modo HERNANDO CEVALLOS FLORES, ha participado activamente en las recientes convocatorias de movilizaciones sociales en Perú, respaldando concentraciones en defensa del voto y protestas nacionales. Sus llamados a través de la plataforma de redes sociales FACEBOOK, han estado dirigidos a realizar una movilización nacional, a fin de mantener la "vigilancia ciudadana" frente a los ajustados resultados electorales.
5. Sectores afines a Juntos por el Perú cuestionan los resultados de las elecciones. Entre ellos, Pavel YABAR quien mediante la plataforma de redes sociales FACEBOOK, insta a la movilización popular de forma independiente a sus líderes. Mantiene esta posición pese a que los observadores internacionales de la OEA señalaron que el proceso electoral se llevó sin mayores inconvenientes.
6. Mediante la plataforma de redes sociales FACEBOOK, la ciudadana peruana Andrea Lía VALDERRAMA CAMPOS publicó las frases "La narrativa de la coalición mafiosa, ahora es la de silenciarnos, PORQUE DICEN QUE NO PODEMOS CUESTIONAR SU FRAUDE BLANCO", "ACTIVEMOS EL BLOQUE ANTIKEIKO", "KEIKO JÁMAS SERÁ PRESIDENTA"

"Activemos el bloque anti Keiko". "Keiko jamás será presidenta". "La narrativa de la coalición mafiosa ahora es la de silenciarnos porque dicen que no podemos cuestionar su fraude blanco", escribió en sus redes hace un par de semanas. Días después, la Procuraduría de Orden Público la denunció

por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, castigado con una pena de entre tres y seis años de cárcel.

Valderrama vive en Puente Piedra y fue candidata a diputada por Venceremos. Se enteró de la denuncia por un grupo de amigos que le escribieron por WhatsApp. Leyó



El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía, firmó el informe de inteligencia que sustenta la denuncia.



"La Procuraduría está cumpliendo un rol político y se presta para la persecución y estigmatización de personas que simplemente quieren ejercer sus derechos constitucionales", dice Lía Valderrama.

el mensaje cuando iba camino a la manifestación convocada por Juntos por el Perú en el Campo de Marte la tarde del 19 de junio. No podía salir de su asombro.

Su padre, Teógenes Valderrama González, es un exdirigente del SUTEP de Huánuco que en 1992 sobrevivió a un atentado de Sendero Luminoso. El Estado reconoció a su familia como víctima del terrorismo. Treinta y cuatro años después el Estado persigue a su hija por opinar en redes sociales.

"La Procuraduría está cumpliendo un rol político y se está prestando para la persecución y estigmatización de personas que simplemente quieren ejercer sus derechos constitucionales", dice Valderrama.

La denuncia de 72 páginas que firma el procurador Moisés Vega —dicen los expertos— ha sido redactada del modo más desprolijo. Eso explica por qué en la primera hoja incluye en la lista de los denunciados a las dirigentes Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar y por qué, en "el desarrollo" del texto, el procurador no las vuelve a mencionar.

"La Procuraduría está usando de forma abusiva el derecho, donde lo que hacen es imputar por imputar sin ni siquiera adjuntar algún elemento de convicción", asegura Indira Rodríguez, abogada penalista.

Una de las principales presuntas "pruebas" a la que



Periodista Claudia Cisneros, residente en Estados Unidos. La Procuraduría de Orden Público la denunció por "grave perturbación de la tranquilidad pública" a raíz de sus opiniones.

echa mano el procurador es el informe de un "patrullaje virtual" firmado por el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la DIVIAS. Esta nueva modalidad de "persecución policial" consiste en hacer un barrido por las redes sociales en busca de posibles sujetos "peligrosos" para el régimen de turno.

El abogado penalista Julio Arbizu asegura que es el mismo mecanismo que viene empleándose desde el gobierno de Dina Boluarte para hostigar a manifestantes por sus opiniones políticas. "Son unidades de la Policía que revisan redes sociales y van de pesca para tratar de encontrar presuntas asociaciones de personas con delitos", explica. "Abren investigaciones que generalmente son archivadas, pero para eso ya han sometido

a los investigados a largos procesos judiciales, gastos económicos y angustias".

Antes de ser procurador de Orden Público, Moisés Vega fue procurador especializado en delitos de terrorismo. Uno de los casos más polémicos en los que participó fue Perseo, en el que se condenó a integrantes del Movadef por afiliación a una organización terrorista pese a que ninguno de estos participó en actos violentos.

Al mando de la Procuraduría de Orden Público, Vega se ha convertido en un denunciante recurrente de manifestantes. Entre los denunciados se encuentran varios jóvenes que marcharon contra la "Ley Pulpín", también estudiantes de San Marcos que protestaron contra la reelección de Jeri Ramón y varios de los transportistas que salieron a

las calles a condenar la ola de extorsiones durante el gobierno de José Jerí.

"En la mayoría de estos casos lo que se hace es criminalizar la libertad de expresión", dice el abogado Julio Arbizu.

A falta de pruebas para armar las denuncias, la Procuraduría y la DIVIAS recurren a las publicaciones que hacen los trolls en las redes sociales que a su vez difunden noticias falsas de pasquines virtuales. El caso más claro es el de Claudia Cisneros. Para denunciarla usaron una nota del portal *Prensa de Facto* que tergiversó un video publicado por la periodista en sus redes. La nota del pasquín titulaba: ¿AMENAZA? Claudia Cisneros dice que las calles arderán si gana el fujimorismo".

"Yo dije que se cuiden de hacer trampa porque la gente

no se va a quedar tranquila y podría tomar las calles", dice Cisneros.

A la denuncia, el procurador adjuntó publicaciones de Cisneros con frases como "Ni blanco ni viciado - Sra. Knunca más", "¿Por qué ahora los fujimoristas dicen que Keiko ganaría?".

La Procuraduría también sumó como "prueba" la publicación de un usuario de Facebook identificado como "El fujimorismo en su máxima expresión". En esta cuenta se difundió un texto que dice: "Reúnen firmas para presentarlas ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. y así se logre la expulsión de Claudia Cisneros de ese país". Al procurador le pareció una prueba contundente en contra de Cisneros e incorporó ese texto miserable como evidencia de que la periodista está "incentivando actos de alteración del orden público".

"Por su contenido confrontacional, intimidatorio y amenazante, esas publicaciones son objetivamente aptas para generar zozobra colectiva", escribió Vega.

"Esta es una clara y directa persecución política al libre ejercicio de la expresión, no solamente de nosotros como ciudadanos sino de políticos, comunicadores y activistas", responde Cisneros. "Se está preparando el terreno para estar de vuelta en los noventa. Esta seudodenuncia es una forma de aleccionar a aquellos que se atreven a decir algo discordante contra el fujimorismo de Keiko".

La denuncia contra el exministro Hernando Cevallos, quien integró el equipo técnico de Juntos por el Perú, sigue el mismo patrón. La Procuraduría recoge varios textos suyos publicados en Facebook que considera peligrosos. Por ejemplo: "La democracia hay que defenderla", "Quieren robarnos la democracia" y "No les regalemos el esfuerzo del pueblo".

"Yo no me he peleado con la Policía ni he llamado en ningún momento a la gente a que realice algún acto violento. Nada", dice Cevallos. "Lo preocupante —añade— no es lo absurdo de la denuncia sino la actitud de querer atemorizarnos con arbitrariedades".

Al periodista Pavel Yábar

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

RICARDO VELAZCO

Todo apunta a que El Niño nos hará llorar otra vez. "Hay que pedirle a la divina providencia que no llueva porque no estamos preparados", dice el experto del clima Abraham Levy. Difícilmente se producirá el milagro. La Comisión Multisectorial a cargo de monitorear el Fenómeno del Niño (ENFEN) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos confirmaron que es muy probable que El Niño sea "fuerte". Estamos en tiempo de los descuentos y con las tareas sin hacer.

"Ya no podemos hablar de prevención. No hay tiempo. Lo que toca es prepararse para la emergencia: hacer un inventario de la maquinaria, una lista de puntos críticos. Hay que acopiar sacos terreros para las barreras, geobolsas que funcionen como diques, alimentos, medicinas, calaminas. Hay que organizar comités de emergencia", señala Pedro Castillo Zavaleta, ingeniero y exconsultor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

El gobierno de José Balcázar le ha negado a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) una partida para culminar obras claves para enfrentar los estragos del fenómeno.

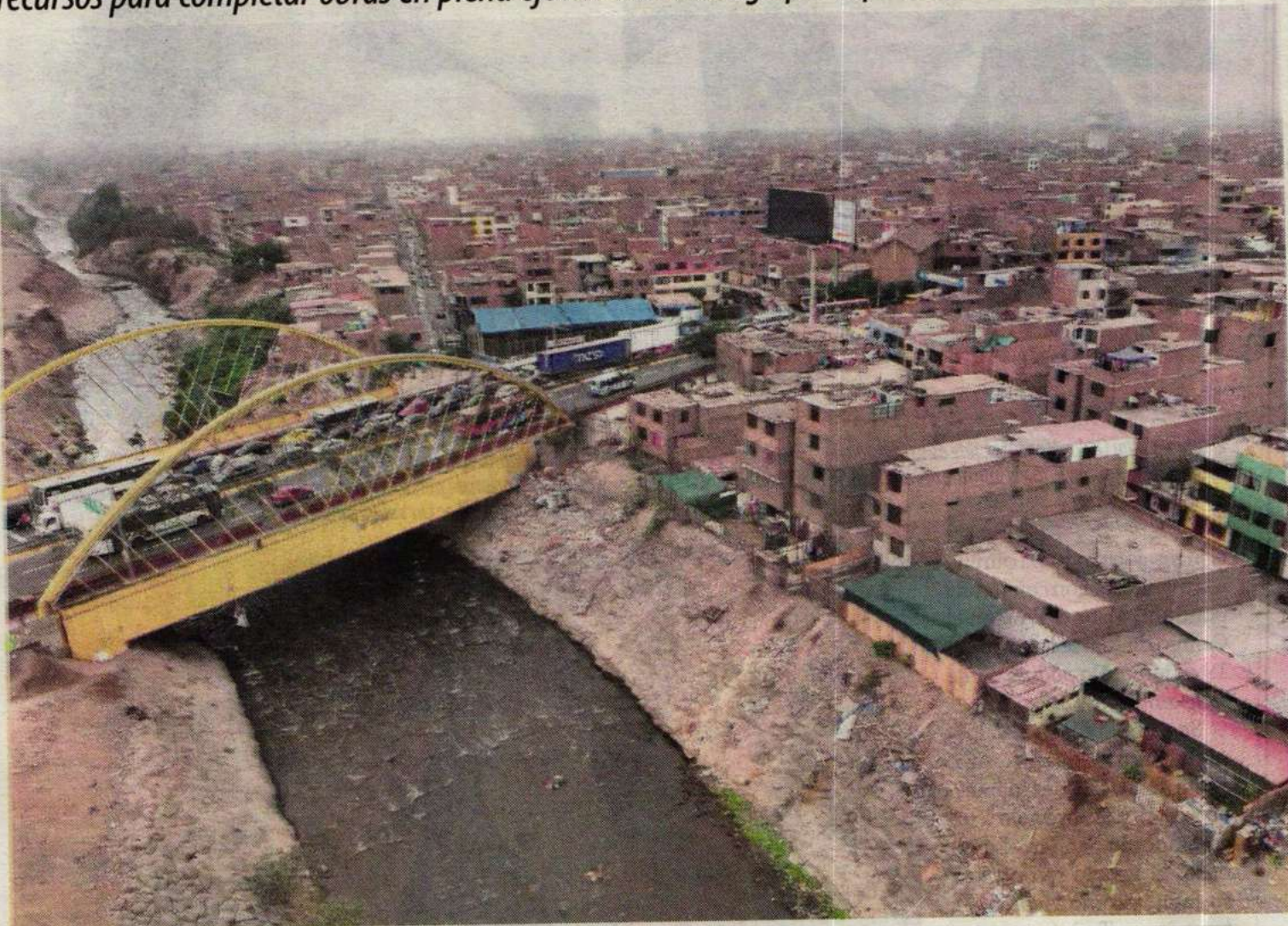
Según la ONG Red de Estudios para el Desarrollo, tres millones de personas están en riesgo muy alto ante movimientos de masas o huaycos, mientras que dos millones de peruanos se encuentran en peligro por las inundaciones y desbordes de los ríos. La semana pasada el Ministerio de Defensa informó que 86 distritos de Lima, Piura, Lambayeque y Áncash presentan un nivel "muy alto" de sufrir deslizamientos.

A falta de obras de ingeniería, en algunos lugares se están realizando trabajos mal hechos que podrían terminar en desastre. "Descolmatar a diestra y siniestra tampoco es la solución. Eso está ocurriendo en Piura y en Chosica. Se está descolmataando hasta por debajo del relleno de las defensas ribereñas y eso socava las estructuras", advierte Fredy Morán, presidente de la Comisión de Riesgos

Otra vez desprevenidos

► El Niño estaba cantado, pero no hicimos lo que debíamos hacer y el gobierno negó recursos para completar obras en plena ejecución. El castigo por repetirnos será duro

El Puente Bella Unión, que conecta el mercado de Lima con San Martín de Porres, tiene los pilotes deteriorados, según ha determinado el Colegio de Ingenieros del Perú.



Carlos Bocanegra, biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo: "Los muros de protección que se están construyendo son de piedra y, si no se terminan, el agua que se acumule en esos puntos ejercerá presión y estará acompañada de muchos sedimentos". En la foto señala una obra de protección ribereña inconclusa en el río Moche.





FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

Ingeniero Fredy Morán, presidente de la Comisión de Riesgos y Desastres del CIP: "Los proyectos de infraestructura en la costa se han hecho sin tener como variable los eventos climáticos extremos".

y Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). Este año el CIP elaboró un informe sobre el estado de la infraestructura para enfrentar el fenómeno de El Niño. "Los proyectos de infraestructura en la costa se han hecho sin considerar los eventos extremos como una variable. Encontramos sistemas de puentes con insuficiente capacidad hidráulica, sistemas de drenaje colapsados, carreteras que se han hecho al borde de los ríos y defensas ribereñas deterioradas", dice Morán.

La semana pasada la ANIN advirtió públicamente que el MEF solo aceptó entregarles 210 de los 830 millones de soles que requirieron para terminar siete proyectos claves. Tres de esas obras son de Lambayeque. La institución solicitó 400 millones de soles para construir un drenaje en Chiclayo e implementar defensas ribereñas en los ríos Olmos y Motupe. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó 63 millones de soles para la protección de esos ríos. A la capital de Lambayeque no le concedió ni un céntimo.

Y a veces no se trata sólo de la avaricia del MEF sino del maridaje de la incompetencia institucional y la corrupción.

La obra de las defensas ribereñas del río Olmos se aprobó el 2020. Seis años después



FOTO JOEL DURÁN • H13

Abraham Levy: "Hay que pedirle a la divina providencia que no llueva porque no estamos preparados".

se ha construido el 26% del proyecto.

Ocurre lo mismo con las labores en el río Motupe, donde solo se avanzó un 32%. Según el periodista local Lester Solís, esta situación se repite en las riberas de otros ríos como Reque, con un proyecto que lleva 17 años haciéndose y todavía falta casi el 30% para culminar.

La instalación del drenaje de Chiclayo ni siquiera ha empezado pese a haber sido aprobada en el 2022.

El cuadro se repite en la capital de Tumbes. La ANIN solicitó 40 millones de soles para ejecutar un proyecto de drenaje para la ciudad y la administración Balcázar lo rechazó. Otras 16 obras de limpieza de ríos en la misma región aparecen como incompletas, según el Gobierno Regional de Tumbes.

Piura es otra de las regiones más vulnerables. En marzo del 2025 la ANIN presentó los expedientes técnicos para colocar defensas ribereñas en



FOTO ARCHIVO • H13

"En la quebrada Cansas se están instalando pozos de cinco metros de profundidad para aguantar los desbordes, pero esos se van a llenar rápidamente", dice el ingeniero José Guevara.

cinco puntos del río Piura por 177 millones de soles. Sin embargo, a la fecha las cinco obras están en cero. "El caso del río Piura es un problema porque, cuando baja, arrastra muchos sólidos. En la parte del bajo Piura no se va a poder manejar caudales extraordinarios. Si vemos los antecedentes de 1983 y 1998, la lluvia sobre Piura y otras ciudades mayores del norte es simplemente brutal", señala Abraham Levy.

En el 2021 la Autoridad para la Reconstrucción con

Cambios contrató a un equipo de ingenieros que trabajaron en un plan de acciones rápidas para reforzar la región norteña tras el desastre de El Niño Costero. Este equipo de asesores diseñó 11 represas, 70 defensas ribereñas y un sistema de drenaje que podía estar listo en menos de dos años. En el 2022 el plan fue descartado y el equipo desarticulado. El ingeniero Castillo Tarazona pone el foco en la vejez de los diques para evitar desbordes de los ríos. "Varios municipios piuranos instalaron diques de hasta 60 metros, pero ahora todo eso está deteriorado", señala.

En La Libertad, la obra de la quebrada San Idelfonso también quedó congelada en el tiempo, paralizada al 77% de su ejecución. "El Niño Costero de 1925 inundó todo Trujillo y destruyó la ciudad. En el 2017 sufrió otras siete inundaciones. Trujillo está sometida a los huaycos de San Idelfonso", dice Abraham Levy.

El proyecto que obtuvo luz verde el 2019 requería de 200 millones para poder terminar la obra y el MEF desembolsó 61 millones y medio de soles. "Los muros que se están construyendo son de piedra y el problema es que si no se terminan, el agua que se acumule en esos puntos va a ejercer presión y va a estar acompañada de muchos sedimentos. Es una amenaza muy preocupante", señala Carlos Bocanegra, biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo. Ante la urgencia y la falta de presupuesto —dice el especialista— algunos alcaldes colocaron protectores de plástico en algunas partes del río Moche. La medida es un tributo a la improvisación.

La ANIN también solicitó 160 millones de soles para terminar de construir el sistema de protección para la quebrada de Cansas, en Ica, pero sólo recibirá 55 millones de soles de financiamiento. El proyecto obtuvo luz verde el 2021, pero los trabajos se iniciaron recién en el 2024. Ahora el avance es del 60%. "El tema con la quebrada de Cansas es que se están instalando pozos de cinco metros de profundidad para aguantar los desbordes, pero se van a llenar rápidamente", señala el ingeniero José Guevara Cubas.

Otra obra que se quedará

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Volver a los 17

► Un adolescente acusado de robo es llevado a la Comisaría de Manchay. El padre del muchacho dice que le pidieron 2,000 soles para liberarlo. No los tenía. Ofreció conseguir 500. Entonces, apareció el cadáver

SHANNA TACO

Cuando el perrito de criminalística ingresó al calabozo de la Comisaría de Manchay, sintió un agudo mal olor. En el acta dejó constancia de que en la carcelita había basura acumulada, que era un lugar insalubre y carecía de luz. Ahí pasó sus últimas 48 horas el menor de 17 años que murió ahorcado. La policía dice que se suicidó. Los padres aseguran que se trató de un homicidio.

La crónica de sus últimas horas con vida empezó a escribirse a las tres de la madrugada del sábado 13 de junio, cuando un ruido en la entrada de su casa despertó a Aída Rojas Bravo. Le estaban robando. Salió corriendo detrás del ladrón y con ayuda de tres vecinos, lo atraparon. Era un adolescente de 17 años a quien llamaremos Mateo.

Dos patrulleros del serenazgo, al mando de Juan Marín Vásquez, se encargaron de trasladarlo a la Comisaría de Manchay. Allí quedó a cargo del suboficial Christian Chávez Venegas.

El caso fue notificado a la fiscal Micaela Guzmán Machado, adjunta de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Lurín, quien autorizó que continúen las diligencias y dispuso el traslado del menor para evitar que "pernocte con adultos". La orden fue letra muerta. De hecho, la fiscal no se apareció en la comisaría en ningún momento y se limitó a dar instrucciones por WhatsApp.

Mateo permaneció encerrado en la celda junto a Gerson Arce Torres, un detenido de 29 años. El calabocero era el suboficial Christian Cáceres Gutiérrez. Lo sacaron de la celda a las 3 de la tarde para el examen de medicina legal.

El informe médico determinó que el menor tenía moretones en el antebrazo y en las piernas. Mateo le dijo al médico legista que había sido agredido por desconocidos y serenos. Cuando terminó la diligencia, por orden de la fiscal fue trasladado al Depincri de La Molina. Allí no quisieron aceptarlo. Alegaron que no era su competencia.

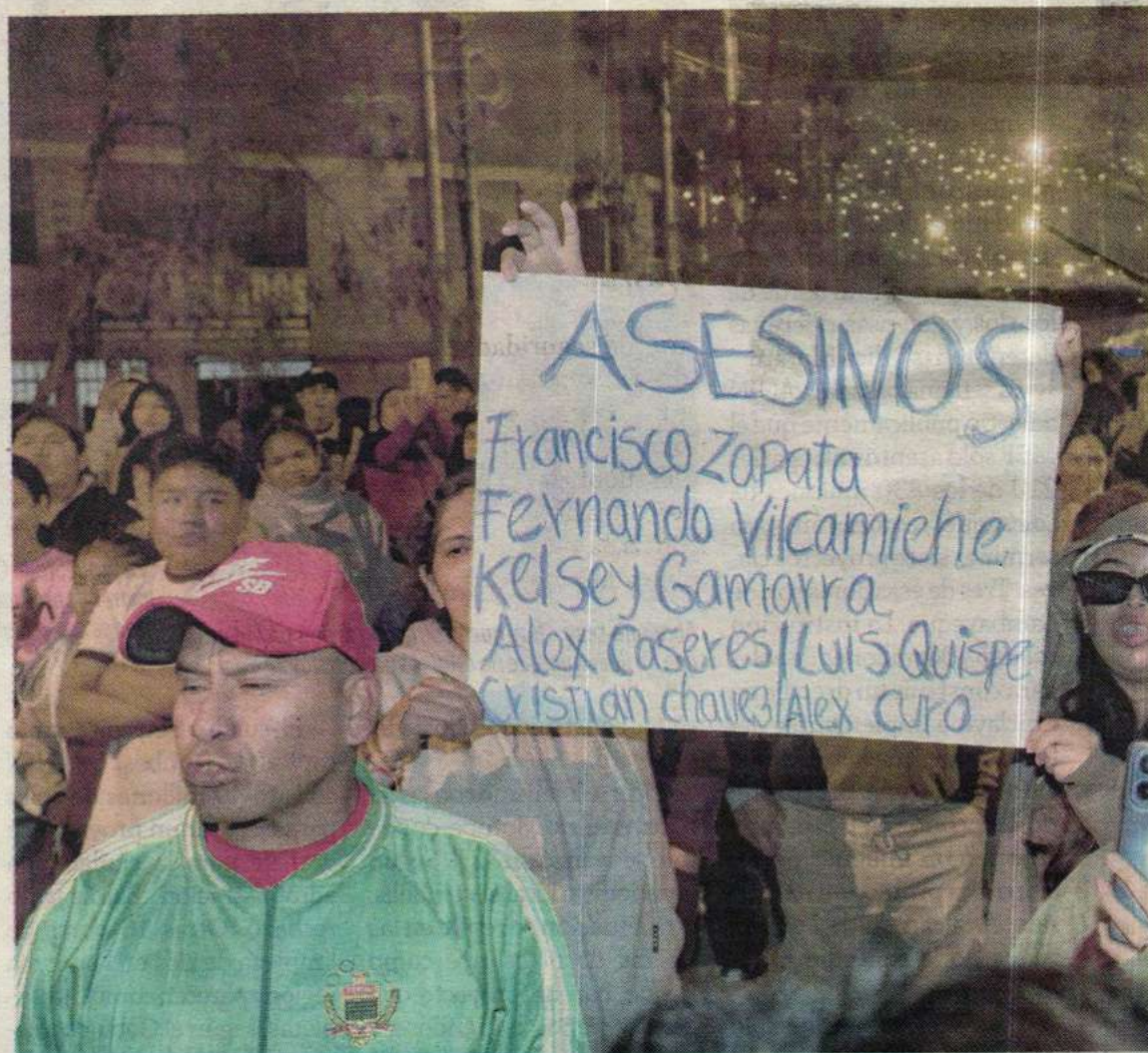
El padre de Mateo, Javier C., llegó a la Comisaría de Manchay a las 8 de la noche. Para entonces ya llevaba más de 12 horas detenido. Su familia lo había estado buscando sin suerte hasta que un vecino les dijo que lo había visto en un patrullero.

Mateo cursaba el cuarto de secundaria y estudiaba en el turno tarde. Un día antes de su detención, el viernes 12 de junio, después del colegio, pidió permiso para salir con sus amigos. No volvió a casa.

En la comisaría, el suboficial Diego Gálvez Quispe informó al padre que Mateo estaba denunciado por hurto y que lo estaban trayendo desde la Dirincri de La Molina.

Eran cerca de las 9 de la noche cuando vio entrar en la dependencia policial a su hijo enmarcado, con la ropa sucia. "Mi hijo no había comido nada. Le pregunté qué le había pasado y me dijo: 'nada, pa, solo sá-

Javier C. y María Fernanda B., padres del adolescente fallecido en la Comisaría de Manchay. Denuncian que los efectivos policiales le condicionaron la libertad de su hijo a cambio de dádivas y dinero.



Protesta de los vecinos de Manchay frente a la sede policial el pasado lunes 22 de junio. "Todos los vecinos en Manchay sabemos que esta no es una comisaría, es un banco donde te paran sacando plata", dijo una de las protestantes.

came de acá'. Me dijo que lo habían golpeado porque no había querido dar su nombre", recuerda. La conversación fue muy breve. Después

se lo llevaron al calabozo.

El suboficial Cáceres le pidió volver al día siguiente. La madre le llevó mantas y comida.

El domingo 14 regresaron con el desayuno y el almuerzo. No les permitieron verlo. Sólo les recibieron los paquetes.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



El signo de asfixia alrededor del cuello que Javier C. halló al revisar el cuerpo de su hijo. Los efectivos de la Comisaría de Manchay le dijeron que el menor se había suicidado utilizando el pasador de su polera.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



Micaela Guzmán Machado, fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Lurín, a cargo de la investigación contra el menor. Nunca acudió a la comisaría, todas las diligencias las hizo por WhatsApp.

maras de seguridad. Allí el padre presenció una escena que no logra entender hasta ahora.

“El suboficial Cáceres ingresó al calabozo, prendió la linterna de su celular y le dijo a mi hijo: ‘quítate la ropa’. Su ropa interior, todo. Cáceres algo le hablaba en la oreja a mi hijo y hacía gestos con la mano como si le estuviera regañando. Mi hijo estaba llorando”, relata el padre.

Terminada la visualización de las imágenes, le preguntó al suboficial Cáceres cuánto tiempo más tendrían retenido a su hijo. “Me mira y me dice: ‘trae algo pues, no sé, un pollo a la brasa con su gaseosa’. Le pregunto si luego de eso iba a dejar a mi hijo en libertad, me dijo: ‘si traes, te lo llevas’”. El padre, asegura, ordenó un pollo a



Mateo detenido en la Comisaría de Manchay la madrugada del sábado 13 de junio. Junto a él la aspiradora que habría hurtado.

la brasa.

“Luego me dijeron que mi hijo me estaba llamando –recuerda–. Me acerqué y le pregunté por qué lo habían hecho desvestirse. Se puso a llorar y me dijo: ‘papá, págales lo que te pidan y sácame de acá’. Le dije que ya había llegado el pollo y que nos íbamos a ir a la casa”.

No fue así. Ahora querían dinero. Él padre dice que les ofreció 200, que le pidieron 2,000 y él respondió que po-

día conseguir 500. “El suboficial Yetlin me preguntó cuánto le iba a dejar. Le dije: ‘200 ¿puede ser?’ ‘Estás loco –me dijo–, hay una señora que tenía un caso similar que ha pagado 2,000 soles’. Entonces, técnico, voy a hacer lo posible por conseguir 500. Ahí me dijo que espere afuerita”.

Cuando les pidieron retirarse, la madre se acercó a la puerta de la carcelita para despedirse de su hijo, pero

el adolescente no contestó. Alarmada, avisó a su esposo.

Los policías respondieron que debía estar durmiendo. Pero como los padres se negaron a irse sin ver a su hijo, aceptaron entrar a la celda para sacar al chico. Minutos después les informaron que el menor había “sufrido una descompensación”. Javier C. corrió hacia el calabozo y presenció cómo sacaban a su hijo.

“Sacaron el cuerpo y lo botaron a la tolva como si fuera cualquier cosa –relata–. Luego todos ellos se metieron a la comisaría. Nadie salía a arrancar la camioneta. Yo estaba desesperado, decían que no había autorización, luego que no había la llave”.

Al revisar el cuerpo de su hijo, le vio una marca en el cuello. Los policías le dijeron que se había colgado con el pasador de su polera. En el centro médico certificaron su deceso.

El informe pericial de la escena del crimen detalla que en uno de los barrotes de las ventanas se halló un fragmento del pasador roto. En el piso se encontró el resto del cordón.

“La fiscal nunca se apersonó a la comisaría, eso es irregular. Cuando se trata de un menor, prima el interés superior del niño y se le tiene que atender de manera inmediata”, dice Stefano Miranda, abogado del mayor Zapana Pilco, el comisario de Manchay que fue separado del cargo tras la muerte del adolescente.

El último lunes 22 de junio vecinos de Manchay protestaron en la puerta de la comisaría. Una de las manifestantes, Marifé Vivanco, exvoluntaria de Derechos Humanos de la Comisaría de Manchay, dice que la despidieron en enero de este año tras denunciar que en la sede policial “maltratan a los usuarios de diferentes formas y modalidades, cometiendo abusos y realizando actos de hostigamiento, violencia psicológica, física y coacción”.

“Todos los vecinos en Manchay sabemos que esta no es una comisaría, es un banco donde te paran sacando plata. Pedimos justicia para el menor”, dice otra vecina que se sumó al plantón. ■

VIENE DE LA PÁGINA 14

y que no habrían querido desplazarse nuevamente para votar por Keiko tras las acusaciones de fraude formuladas por "Porky" contra ella.

Entre la primera y la segunda vuelta, Keiko multiplicó varias veces su votación en el territorio peruano, pero en el extranjero casi quintuplicó su porcentaje. No existe ninguna otra de las 26 regiones electorales donde se haya producido un salto semejante. En la primera vuelta, Keiko quedó en segundo lugar en el exterior con el 12,76% de los votos emitidos, pero en la segunda ronda bordea el 60%. Si en abril obtuvo el 14,3% dentro del territorio peruano —un punto y medio más que entre los PEX—, en junio su porcentaje en el exterior es entre 12 y 13 puntos superior al que alcanzó dentro del país.

A diferencia de las elecciones de 2021, cuando todo el centro y la derecha se unieron contra la izquierda, en el exterior importantes candidatos de derecha moderada que contaban con respaldo dentro de la diáspora terminaron apoyando a Roberto Sánchez, por lo que resulta difícil explicar de dónde provino un crecimiento tan pronunciado del fujimorismo en dicho sector.

Si no se anulan los votos del exterior, Sánchez no ha de reconocer a un eventual gobierno de su rival creándose potencialmente un gobierno paralelo.

Si esos votos se anularan, deberían repetirse las elecciones no solo

en esa circunscripción sino también a nivel nacional.

Existe un precedente importante. Austria anuló su balotaje de 2016 y lo postergó para una fecha posterior. Allí no hubo fraude, pero sí irregularidades en el conteo de unos 70,000 votos postales. Como estos superaban el margen de 30,000 votos de diferencia, se ordenó repetir la elección, la cual finalmente fue ganada por el mismo candidato, aunque con una ventaja mayor.

Tal vez este ejemplo —y no un golpe— constituya una posible salida. Ciertamente, habrá quienes incluso pidan repetir las elecciones generales. Esto se debe a que el Perú se ha convertido en el único país del mundo en el que el candidato de la derecha más dura (en este caso, López Aliaga) sostiene que le robaron un millón de votos en la primera vuelta. Hasta la víspera de la segunda vuelta, la alcaldía de Lima llamaba a anular el balotaje. Ahora, sectores de la izquierda cuestionan los resultados y varios actores de centro, como Belmont o Fernando Olivera, hablan de fraude en ambas rondas. Los únicos que no han hablado de fraude son los fujimoristas, quienes hasta hoy sostienen que en 2021 perdieron por esa misma razón.

Nuevas elecciones, con reglas claras e instituciones más autónomas, podrían constituir una salida para evitar que el Perú siga siendo un foco de incertidumbre política, algo que ha ocurrido durante la última década. ■

VIENE DE LA PÁGINA 23

va son sus ideas fundamentales. Diría que es bastante dialogante e institucionalista. Escucha mucho. De fuerte voz, pero muy respetuoso y horizontal", afirma Lorenzo Ruiz, miembro del colectivo Bloque Lima Popular.

Al otro lado de la mesa, la puneña Maruja Inquilla, una dirigente social, activista ambiental y crítica feroz de Ccallo, dice que el dirigente representa a un "grupo muy reducido" que no admite otros liderazgos.

"Buscan sus intereses personales, se adelantan sin consultar a las bases. No son representantes del pueblo, de los docentes tal vez. Si te alejas de sus posturas, te tildan de vendido. Hasta los antifujimoristas sienten vergüenza de él", afirma.

"Es un hombre complicado, sectario y de lengua dura —dice César Barrera, dirigente de Patria Roja—. No coincide con la izquierda en general, su conducta es hacer bulla y salirse de algo sensato (...). Está planteando esta tendencia de independizar el sur y eso suena pues... Se aprovecha del espíritu rebelde del aimara".

"Lo que no entiende Lima es que cuando provocan a los aimaras y a los quechuas, ellos responden. Acá hay el concepto de que Lima no quiere a Puno. Cuando Boluarte dijo que Puno no es el Perú, recrudecieron las protestas. Cuanto más ataquen a gente como Lucio Ccallo, más se van a solidarizar con él", afirma el periodista puneño Liubomir Fernández.

Hace unos días Ccallo volvió a los titulares al anunciar una huelga indefinida y desconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Como primera medida anunció el bloqueo del puente internacional de Ilave, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

En su hoja de vida tiene una decena de investigaciones fiscales por terrorismo, disturbios y contra la tranquilidad pública. La mayoría fueron archivadas. Ccallo está convencido de que las dos carpetas que tiene pendientes tendrán el mismo destino.

No se arrepiente de nada de lo hecho en su trayectoria política. "He hecho algo justo y correcto —dice—, y vamos a seguir en ese camino". ■

VIENE DE LA PÁGINA 25

la Procuraduría lo criminaliza por cubrir las protestas de Juntos por el Perú tras la segunda vuelta y sostener un punto de vista distinto al de la OEA.

"Sectores afines a Juntos por el Perú cuestionan los resultados de las elecciones, entre ellos Pavel Yábar, quien mediante Facebook insta a la movilización popular de forma independiente a sus líderes. Mantiene esta posición pese a que los observadores de la OEA señalaron que el proceso electoral se llevó sin mayores inconvenientes", dice la denuncia de la Procuraduría y la División de Investigación de Asuntos Sociales de la PNP.

"Lo que quieren es censurarnos, callarnos y asustarnos", responde Yábar. "Si estuviéramos en un régimen democrático bajo el Estado de derecho, hasta saldría a reírme de eso. Pero viendo cómo está la Fiscalía, llena de cuellos blancos, cómo el Poder Judicial le archiva sus denuncias a Keiko y cómo hay setenta muertos sin ningún sentenciado, me preocupa bastante que esta denuncia pueda prosperar", agrega.

Para sostener que los denunciantes "alteraron" el orden público la Procuraduría ofreció una prueba singular. Señaló que la Municipalidad de Lima cerró las calles del Centro Histórico. "Las conductas desplegadas por los denunciados habrían excedido el ámbito de una mera opinión política, contribuyendo a generar un escenario de incertidumbre, alarma, temor y zozobra colectiva que obligó a las autoridades públicas a adoptar medidas extraordinarias", se lee en la denuncia presentada por el procurador Vega.

Zuliana Láinez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), sostiene que "ninguna de las conductas que ellos atribuyen es una incitación a la violencia. ¿Qué cosa está definiendo la Procuraduría como perturbación a la tranquilidad pública? Esto es criminalizar opiniones, criminalizar postura política. En una democracia es inaceptable".

"En estos casos, callarse no es una opción", dice la periodista Claudia Cisneros.

"Vamos a evaluar la posibilidad de una contrademanda por abuso de autoridad contra ese procurador", señala Hernando Cevallos. ■

VIENE DE LA PÁGINA 27

en planos es el ensanchamiento del río Ica. "Como las 53 familias que viven en la ribera del río se rehúsan a salir, las autoridades no tuvieron mejor idea que estrechar el cauce del río", dice el ingeniero.

"En el 2019 la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ayudó a elaborar un plan territorial con obras prioritizadas para enfrentar estos problemas, pero fue archivado porque a las autoridades locales les conviene que no haya una ruta tan clara de qué hacer para así disponer del presupuesto a su voluntad. No sé qué es peor: que se hagan mal las cosas o que no se hagan", señala la arquitecta Marita Palomino.

Lima tampoco se salva de la negligencia institucional. "Se está limpiando el río Rímac, pero no se ha hecho mantenimiento a los puentes que lo cruzan. En el límite de San Martín de Porres y el Rímac detectamos dos puentes (Dueñas y Bella Unión) cuyos pilotes están debilitados por falta de mantenimiento", señala el ingeniero Fredy Román.

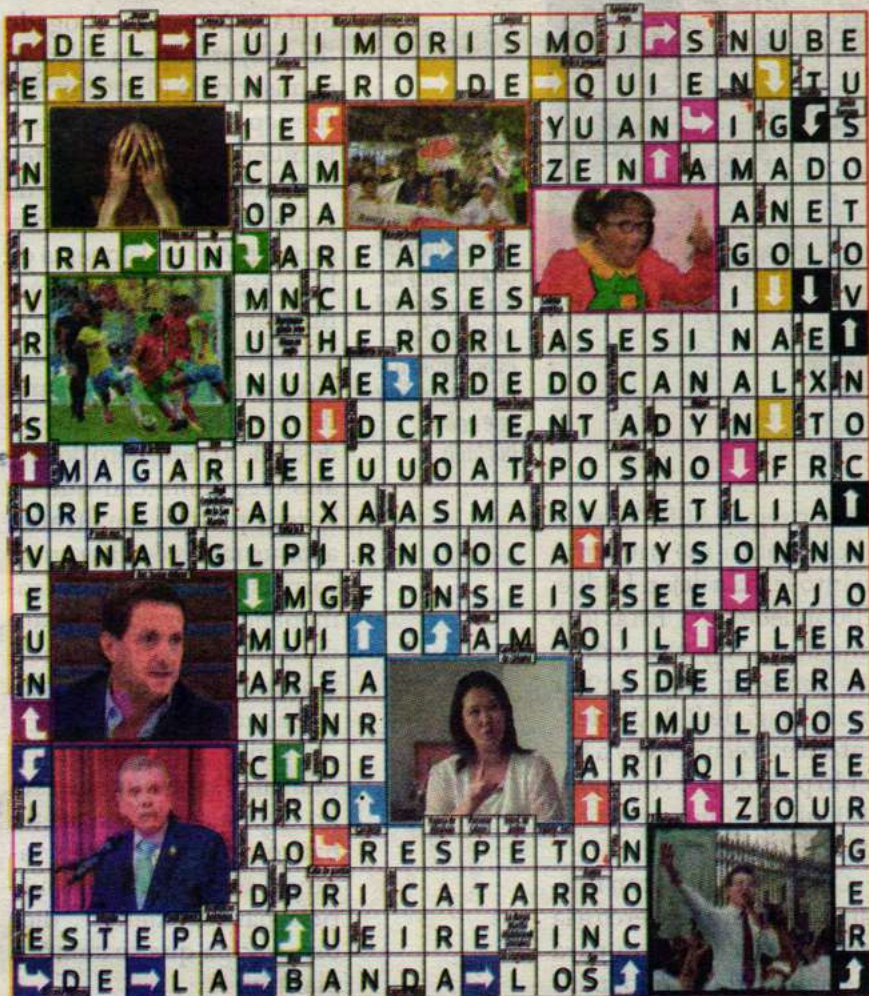
Según un informe reciente de Ositrán, otros 73 puentes, varios de ellos en la costa norte, están deteriorados.

La ANIN también tiene en sus manos un proyecto para instalar defensas ribereñas en 30 quebradas del río Mala, en Cañete. El problema es que el proyecto carece de presupuesto.

"El gobierno pretende que los municipios hagan la descolmatación por su cuenta. Nosotros somos jurisdicciones chicas con presupuestos de cinco millones de soles. Intentamos hacerlo con maquinaria del Ministerio de Vivienda, pero no pudimos cubrir el costo. Teníamos que comprar 100 galones de gasolina diarios para que funcionen las máquinas", dice Jaime Cubillas, exfuncionario de la Municipalidad de Mala.

La única obra que el MEF ha aceptado financiar es la protección del río Lacramarca, en Áncash. Todo parecía marchar bien hasta que los inspectores detectaron que la empresa Obrascón Huarte Lain, a cargo del proyecto, estaba construyendo los diques sin respetar las especificaciones técnicas. En marzo pasado la ANIN resolvió el contrato. La obra quedó congelada al 86% de avance. ■

Pendograma solución anterior N°787



Cada semana, textos que nos
ayudan a saber de qué se trata

HILDEBRANDT

En sus trece

Las columnas más
leídas están en



JAQUELINE DE MANOS CRUZADAS, DE PABLO PICASSO (1954).

PENDEGRAMA N°788

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



**SEMANARIO
HILDEBRANDT EN SUSTRECE**
ES UNA PUBLICACION DE PLUTÓN EDITORES S.A.C.
AÑO 17, NÚMERO 788
VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2026
DIRECTOR:
CÉSAR HILDEBRANDT
EDICIÓN GENERAL: REBECA DIZ REY

LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.

REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DIZ, FABRICIO CABRERA BUDEN
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PEÑEGRAMA:** LAURA YEPEZ ESPEJO
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT, ELIA Y. DIZ **COORDINACIÓN:** ANDREA SIALER **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO, RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
TELÉF: (01) 693-1082 **CONTACTÉENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com, prensa@hildebrandtensustrece.com, www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece
TWITTER: @ensustrece IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA. HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA JUNIO 2026

Revistas.PeruRadio.net.pe